

## LA DELINCUENCIA «SOCIOPOLÍTICA» EN CÁCERES DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

FERNANDO SÁNCHEZ MARROYO

### 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el ámbito de la Historia Contemporánea, desde el punto de vista histórico, en Extremadura el estudio de la delincuencia y de otras formas de disidencia en general ha recibido hasta ahora una atención **dispersa**, concretada en diferentes trabajos que abordan aspectos parciales, enfocados a partir de orientaciones y objetivos muy distintos. Desde el tema de la pena de muerte y su ritual (Rodríguez Sánchez, 1981) o la situación carcelaria (Marcos Arévalo, 1984), hasta cuestiones más generales sobre la relación delincuente-sociedad, pasando por el análisis del funcionamiento de las instituciones judiciales en su vertiente penal (Merinero Martín, 1990). En un plano más concreto, la delincuencia social y política en Cáceres recibió un tratamiento en su momento, pero después no se volvió a insistir en esa línea. Se trataba de estudiar las requisitorias judiciales aparecidas en los Boletines Oficiales de la Provincia mediante la que se reclamaba a individuos, presuntos delincuentes, incursos en determinados tipos de faltas y delitos, pero sin entrar en la caracterización propiamente penal (Martín Cortés, 1977).

En definitiva, no se han realizado apenas trabajos, a partir de un análisis sistemático de las decisiones procesales, aunque las fuentes judiciales se han empleado para estudiar aspectos concretos relacionados tanto con la represión de la disidencia política (Merinero Martín, 1989) o religiosa (Merinero Martín, 1981), como con el proceso de reajuste de las relaciones de propiedad, que conllevó la Reforma Agraria Liberal<sup>1</sup>. En un terreno afín al que aquí se trata y con la misma metodología hay que mencionar que está en curso de realización, culminada ya su fase de procesamiento informático, un estudio sobre la delincuencia social y política en la provincia de Cáceres durante el reinado de Alfonso XIII<sup>2</sup>.

### 2. EL SISTEMA PENAL DE LA SEGUNDA REPUBLICA

La Segunda República, que posibilitó un gran desarrollo de las libertades públicas y el paralelo ascenso del protagonismo popular, ha legado a la posteridad un recuerdo lleno de tensiones y situa-

<sup>1</sup> En este ámbito hemos realizado diversos trabajos, unos publicados, otros en vías de publicación. Cfr. Sánchez Marroyo, F., *La formación de una clase dirigente. La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del siglo XIX*, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1991.

<sup>2</sup> Manzanares Pascual, H., *Tensiones sociales a través de las fuentes judiciales*, Memoria de Licenciatura en vías de redacción. Universidad de Extremadura.

ciones conflictivas, que la historiografía ha contribuido a incrementar al centrar, precisamente, su interés en estos aspectos conflictivos. El precipitado final de la experiencia democrática republicana ha colaborado a intensificar aún más esta sensación, de forma que la imagen del régimen ha quedado asociada a la idea de **violencia política y social**. Multitud de trabajos han divulgado esta imagen, característica de un modelo de convivencia en permanente estado de exaltación callejera. Las fuentes usualmente manejadas, entre ellas básicamente la prensa, han permitido obtener una visión parcial del asunto, siempre limitada por los problemas que subyacen en aquella (censura, "ruido"), especialmente en situaciones de creciente deterioro de la vida social, fruto de los violentos enfrentamientos de clase. Es este un aspecto sobre el que se ha llamado la atención, desde un renovador planteamiento metodológico (Rodríguez de las Heras, 1980). Aquí se trata de conseguir una aproximación a aquel fenómeno a través de la vía penal.

Todo sistema penal obedece a unas determinadas relaciones de poder; como se ha escrito, "la pena, su sentido, funciones y finalidad no puede entenderse si al mismo tiempo no se la analiza dentro de un sistema socio-económico y la forma de Estado imperante" (Bustos, Hormazábal, 1980: 99). Tiene como objeto, en última instancia, contribuir a la **salvaguardia** del orden establecido, persiguiendo, por tanto, la disidencia. Esta profunda conexión entre sistemas políticos y delincuencia hace que la misma concepción y caracterización penal de los hechos varíe con el tiempo, en función de las transformaciones que han conocido aquellos. En España, durante la Historia Contemporánea, fase en la que se produce la codificación, los cambios de régimen supusieron modificaciones de los perfiles de la criminalidad, que los jueces se encargaban de interpretar.

En el ámbito penal, la Segunda República heredó las normas de la monarquía, entre las que destacaba el durísimo Código Penal, calificado de "gubernativo", de 1928. Por ello, desde el primer momento, se vio obligada a una tarea de adecuación de la fundamental norma punitiva al nuevo espíritu **tolerante** que incorporaba el régimen. Esto llevó a una doble actuación, una inmediata, que se concretó en la anulación de aquel Código, autoritario reflejo de la obra de Primo de Rivera<sup>3</sup> y otra, no menos urgente, pero necesitada de una más cuidada elaboración, de reforma del reimplantado Código Penal de 1870, "adaptando sus artículos a la nueva Ley constitucional y humanizando sus preceptos"<sup>4</sup>. Surgía así la que sería pieza esencial del ordenamiento penal republicano, basada en una mera adecuación de la de 1870 a la sensibilidad que incorporaba el régimen<sup>5</sup>. En su sentido último no dejaba de ser una nueva edición del Código de 1848<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> El Decreto de 15 de abril de 1931 anulaba el Código Penal de 1928, lo que significó la entrada automática en vigor del Código Penal anterior, es decir, el de 1870. A fin de adaptarlo, hasta tanto se preparaba otro, a la legalidad republicana, un Decreto de 2 de mayo introdujo en él las imprescindibles reformas exigidas por el cambio en la forma de Estado. Cfr. Tomás y Valiente, F., *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Tecnos, 1983, pp. 503 y ss.

<sup>4</sup> "Exposición de motivos" de la Ley de 27 de octubre de 1932 por la que se publicaba el Código Penal, *Gaceta de Madrid*, 5-XI-1932.

<sup>5</sup> En la "Exposición de motivos" de la Ley de 27 de octubre de 1932 se agrupaban las "parcas reformas" de esta nueva edición del Código de 1870 en cuatro grandes bloques: a) las obligadamente impuestas por la Constitución de 1931; b) las derivadas de la necesidad de corregir errores técnicos; c) las destinadas a humanizar las penas, adaptándolas a la sensibilidad contemporánea (derogación de la pena de muerte y de la de cadena perpetua, ampliación de eximentes, aumento de atenuantes y restricción de agravantes), y d) las de carácter diverso (adaptación de la cuantía de las multas al valor de la moneda, nueva concepción de la reincidencia, etc.).

<sup>6</sup> Antón Oneca, J. y Rodríguez Muñoz, J. A., *Derecho Penal. I. Parte General*, Madrid, 1949, p. 67.

Se **dejaba** para otra ocasión, que la evolución de los acontecimientos impediría concretar, la puesta a punto de un Código Penal propio. Además, se fueron añadiendo nuevas normas, especialmente dedicadas al control de la disidencia política y del orden público, que se analizarán en el contexto de este trabajo, algunas de las cuales serían a su vez rectificaciones de las propias novedades penales introducidas por el régimen en los primeros momentos (pena de muerte). Por otro lado, no se debe olvidar que parte de esta disidencia era tratada por los tribunales militares, cuyas decisiones escapan a nuestra consideración.

### 3. SOBRE LA IDEA DE DELINCUENCIA Y SUS POSIBILIDADES DE ESTUDIO

La óptica **provincial** con la que se trabaja hace que las situaciones contempladas en este estudio sean todas ellas delictivas, al margen de que la justicia encontrase o no indicios de culpabilidad. Quiere esto decir que una amplia gama de casos, englobados en la categoría de faltas, eran tramitados en los juzgados municipales y por tanto escapan a nuestra consideración.

Sobre el concepto general de **delincuente** (autor de un delito), se utiliza, en principio, la simple caracterización penal; tanto en el Código Penal de 1870, vigente en los primeros momentos, como en el de 1932, simple reforma del anterior, se mantenía la misma concepción de la delincuencia, por lo demás heredada de la vieja norma de 1848<sup>7</sup>: «Son delitos o faltas las acciones y las omisiones voluntarias penadas por la ley (...) El que cometiere voluntariamente un delito o falta incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el mal ejecutado fuere distinto del que se había propuesto ejecutar»<sup>8</sup>. De acuerdo con el principio de «nulla falta sine poena, sine lege», vigente en nuestro ordenamiento jurídico, las normas penales se encargaban de tipificar bien cada una de las actividades consideradas delictivas. Todo ello dejando de lado cualquier interpretación de tipo ideológico o político que, evidentemente, subyacía en cada formulación penal.

Pero, al margen de esta caracterización meramente punitiva, también se han dado diversas definiciones de delito, **filosóficas**, que pretendían construir un sistema de principios de carácter universal<sup>9</sup>; **sociológicas**, que buscaban los elementos comunes en la concepción del delito típica-

Un protagonista de aquellos sucesos, también notable penalista, dejó este testimonio: "La República fue proclamada en una época bastante difícil para nosotros; las dictaduras y los estados fuertes estaban de moda y todo ello hizo que la República Española no encontrase ambiente acogedor en el resto del mundo. Había mucho que hacer -sobre todo defender el nuevo régimen- y escribir un Código Penal no es tarea fácil, por eso nos contentamos con mantener el Código Penal de 1870; es decir, el Código de 1848, modernizado y puesto al día, haciendo de él instrumento de defensa de la República Española. Nos esforzamos en introducir algunas modificaciones técnicas para mejorar la ley punitiva y, sobre todo, para suavizar las penas que, para aquella época, eran ya demasiado severas", Jiménez de Asúa, L., "El Derecho Penal Español" en *El Criminalista*, II, 2ª serie, Buenos Aires, Víctor P. de Zavala Editor, 1958, p. 40.

<sup>7</sup> El primer *Código Penal* español, el de 1822, establecía en su artículo 1º que cometía delito "el que, libre y voluntariamente y con malicia, hace u omite lo que la ley prohíbe a manda bajo alguna pena". Si no había malicia se trataba de simple culpa (artículo 2º).

<sup>8</sup> Artículo 1º del Código Penal de 1870. El último párrafo estaba redactado en el Código de 1850 como sigue: «el que ejecutare voluntariamente el hecho será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta a aquella a quien se proponía ofender»

<sup>9</sup> Así, Rossi definió al delito como "violación de un deber para con la sociedad o los individuos, exigible en sí y útil al mantenimiento del orden político, de un deber cuyo cumplimiento no puede ser asegurado más que por la sanción penal y cuya infracción puede ser apreciada por la justicia humana",

de las distintas culturas<sup>10</sup> y jurídicas, que, a partir de la consideración de aquel hecho como algo punible, profundizaban en el análisis de las diversas partes de su contenido (antijuricidad, penalidad, tipicidad, etc.)<sup>11</sup>.

El tema de la delincuencia en un espacio determinado puede ser abordado desde una perspectiva general a través de las diferentes memorias judiciales, resúmenes de las causas vistas en cada Audiencia<sup>12</sup>. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, en estos casos, los litigios, al aparecer únicamente bajo su caracterización penal, pueden ocultar, con su denominación genérica, tanto modalidades delictivas de interés sociopolítico, como aspectos **históricamente** trascendentes. En este sentido, por ejemplo, tras las formas de atentado a la autoridad, lesiones, etc. se esconden una numerosa gama de delitos que tienen como base y fundamento motivaciones muy distintas y, con ello, importancia radicalmente diferente para el investigador. Aunque la mayoría de esos episodios delictivos eran simple efecto de la embriaguez, otros, de entidad variable, conocían muy diversas causas. En suma, al margen de la simple caracterización penal, interesan las circunstancias concretas en las que se enmarcaron los sucesos, que, a veces, reflejaban situaciones sociales y políticas de gran riqueza y excepcional interés histórico.

Esta riqueza sólo puede ser apreciada a través del estudio de cada proceso. Los sumarios, voluminosos, son pieza clave para captar todos los matices, al incorporar un notable apoyo documental, necesario para justificar las diferentes alegaciones, fiscales o de la defensa. Sin embargo, han desaparecido en su gran mayoría, fruto de los periódicos expurgos decididos por la Administración, de manera arbitraria y sin mucho respeto por el legado del reciente pasado. De esta forma, son las **sentencias**, conservadas en buena parte<sup>13</sup>, las que permiten el acceso a las circunstancias del proceso. Dos grandes partes se distinguen en ellas, cada una con su propia funcionalidad. Los aspectos estrictamente penales quedan recogidos en los considerandos y en el fallo; mientras que las circunstancias de mayor interés histórico se reflejan en sus diferentes resultandos<sup>14</sup>, que posibilitan el seguir el desarrollo de los sucesos que determinaron la intervención judicial. En definitiva, en las sentencias hay tres aspectos a considerar, cada uno con su propia funcionalidad para el análisis: el delito concreto de que se acusa, las circunstancias que lo motivaron y la calificación penal que mereció a los tribunales.

---

Antón Oneca, J. y Rodríguez Muñoz, J. A., op. cit., p. 131.

<sup>10</sup> En la búsqueda de una caracterización del delito natural se le definió como "ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad, en la medida en que son poseídos por un grupo social determinado", Antón Oneca, J. y Rodríguez Muñoz, J. A., op. cit., p. 132.

<sup>11</sup> Una breve síntesis en Jiménez de Asúa, L., "Reflexiones preliminares sobre el concepto de delito" en *El Criminalista*, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1951, pp. 183-205.

<sup>12</sup> La normativa reguladora de este aspecto es antigua. Por citar alguna: circular de 3 de abril de 1883 que preveía las Memorias anuales de los fiscales de las Audiencias; Real Decreto de 25 de febrero de 1901 que organizaba la estadística de materia penal, etc.

<sup>13</sup> Reglamentariamente los Boletines Oficiales de cada provincia recogen fragmentos de las sentencias, presentación y fallo, pero omiten precisamente la parte de mayor interés histórico, los resultandos.

<sup>14</sup> La ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 regulaba, en su artículo 142, la estructura de las sentencias, estableciendo la funcionalidad de sus diversos elementos: "Se consignarán en *Resultandos* numerados los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados".

Los pleitos estudiados, o lo que es lo mismo, los actos delictivos que aquí se consideran, son los vistos ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Cáceres (denominada **Audiencia Provincial**). A ella llegaban las causas procedentes de los Juzgados de Primera Instancia (13 en la provincia de Cáceres<sup>15</sup>). Las diversas peripecias que conoció el ordenamiento penal de la República incidieron en su funcionamiento, sobre todo por la regulación que recibieron las situaciones de excepción (Tribunales de Urgencia) o causas vistas por el Jurado.

La declaración del estado de guerra en Cáceres, el 19 de julio de 1936, interrumpió el funcionamiento del sistema judicial. Su repercusión más inmediata fue la momentánea paralización de la actividad de la Audiencia, de forma que en los dos meses siguientes apenas se vieron una docena de causas. Hasta el mes de octubre no se comenzó a normalizar la situación; sin embargo el volumen de causas **descendió** notablemente en los años siguientes, como se aprecia en el cuadro I. Pero al margen de esto, la verdadera repercusión fue que la disidencia socio-política, que adquirió ahora un nuevo significado, escapó a la jurisdicción civil, saliendo incluso durante unos meses del ámbito judicial para quedar reducido a un simple acto directo («justicia de guerra»), sin atenerse a ningún tipo de procedimiento legal, mero ajuste de cuentas, de carácter retroactivo<sup>16</sup>. De tal manera, que algunos de los individuos más comprometidos con las ideas anarquistas o marxistas, que se habían visto encausados durante la República en alguno de los diferentes procesos de tipo sociopolítico y condenados a penas de cárcel o absueltos, fueron hechos desaparecer violentamente en el verano de 1936 de manera irregular y sin cuidar ningún tipo de garantía procesal.

El posterior encauzamiento de la situación no significó que el funcionamiento del sistema penal se normalizase, siguió vigente la **excepcionalidad**, caracterizada en el ámbito judicial por la sistemática aplicación del Código de Justicia Militar. De esta manera, una parte de los delitos que habían sido tradicionalmente vistos por la Audiencia pasarían al fuero de guerra<sup>17</sup>. Por lo demás, esta excepcionalidad de la situación incidía en el desarrollo de las propias formas de delincuencia.

<sup>15</sup> En la Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882 (*Gaceta de Madrid* del 15) se crearon los juzgados de 1ª Instancia de la provincia de Cáceres, que correspondían a los partidos judiciales. Conocieron diversas peripecias a fines de siglo, hasta quedar definitivamente consolidados.

<sup>16</sup> Es el fenómeno que conocemos por «represión», sobre el que hemos realizado algunos trabajos. Cfr. Sánchez Marroyo, F.; Calvo García, R.; Mendoza Ruano, J.J.; Borrella Rosado, F.; Bessa Menacho, Y.; Becerra Santos, J.; Massot, C.; Román Álvarez, Mª del M.; López Leitón, A.J.; Galván Márquez, F. y García Hernández, T., "Aproximación a la represión nacionalista en Extremadura (Algunos núcleos significativos)" en *Alcántara*, 17, (1989), pp. 175-195 y Sánchez Marroyo, F., "La Guerra Civil en Extremadura: estado de la cuestión" en *Investigaciones Históricas*, 9, (1989), pp. 139-160.

<sup>17</sup> El Bando de 28 de julio de 1936, que hacía extensivo a todo el territorio nacional la declaración del estado de guerra, vigente ya en algunas provincias, decía en su artículo 5º: «Quedan también sometidos a la jurisdicción de guerra, y serán sancionados, del mismo modo, por procedimiento sumarísimo: a) Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la Autoridad y sus agentes y demás comprendidos en el título III del Código Penal ordinario, bajo el epígrafe de "Delitos contra el orden público"». Medina, L. y Marañón, M., *Leyes Penales de España conforme a los textos oficiales*, Madrid, Editorial Reus, s/f.

**Cuadro I**  
**Causas criminales vistas en la Audiencia Provincial de Cáceres (1931-1938)**

<u>Año</u>	<u>Nº de causas</u>
1931	210
1932	383
1933	272
1934	354
1935	502
1936	321
1937	180
1938	196

**Fuente:** Libros de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

#### **4. CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA DELINCUENCIA EN EL CÁCERES REPUBLICANO**

A lo largo de los cinco años que duró la experiencia republicana, en la Audiencia Provincial de Cáceres se vieron muy diversos tipos de actividades delictivas, procedentes de los distintos juzgados comarcales de la provincia. Con fines meramente **expositivos**, los sintetizamos en seis grandes grupos, más uno indefinido destinado a recoger la amplia gama de los difícilmente agrupables; todo ello a efectos únicamente orientativos. Los resultados aparecen recogidos en el Cuadro II, del que omitimos el año 1936 por su excepcionalidad.

Es preciso advertir que, si bien se trata de una clasificación **funcional** y claramente arbitraria, es, en buena medida, altamente operativa. Aunque respeta la estructura derivada de la caracterización legal de los delitos, los adapta a la preocupación del análisis histórico que es el que aquí resulta predominante. De ahí que se agrupen actividades que, en sentido estricto, responden a situaciones diferentes, pero que tienen evidentes rasgos en común. No es, por tanto, algo rígido, sino adaptado a las necesidades del trabajo.

Los delitos de tenencia de armas y explosivos y los que consideramos políticos constituyen básicamente, junto a alguna referencia a los dirigidos contra la propiedad, el objeto de este trabajo. Requieren, por tanto, al margen de esta simple referencia nominal, un pormenorizado análisis, al que se hace frente más adelante. Bajo la denominación de delitos contra la propiedad se esconde una amplia nómina de actividades delictivas cuya denominador común es la apropiación indebida de unos bienes ajenos. Es, tal como aquí lo concebimos, el delito social por antonomasia, en cuanto es fiel reflejo de la dialéctica poseedor-no poseedor, derivada de una determinada estructura del sistema de propiedad. Englobamos aquí los **robos** en sus distintas manifestaciones: en domicilios, de dinero, de frutos, de ganados, de leña, etc. y los delitos contra las leyes de caza y pesca.

Delitos sexuales eran la violación, los abusos deshonestos, el estupro, el escándalo público, el proxenetismo, la prostitución, etc. A pesar de su reducida entidad numérica, se individualizan por su carácter **diferencial** con respecto a las demás actividades delictivas. En lesiones, muy frecuentes, interesante manifestación de la patología social, se incluyen los homicidios y asesinatos, a fin de cuentas lesiones en grado máximo. Nutren básicamente este grupo las incontables **reyertas** veci-

nales, determinadas, en buena medida, tanto por los odios y rivalidades derivados de una estrecha y forzada convivencia, como por el exceso de consumo de alcohol, cuyos efectos sobre la criminalidad han merecido la atención de los penalistas (Jiménez de Asúa, 1946). Pero también se recogen las

**Cuadro II**  
**Caracterización general de los delitos**

Delitos	1931	1932	1933	1934	1935
Tenencia armas y explosivos	13	25	61	45	44
Políticos	-	4	6	24	14
Contra la propiedad	75	161	96	148	157
Sexuales	3	-	2	2	7
Lesiones	47	84	48	71	149
Desacato, resistencia, etc.	28	67	28	40	75
Varios	44	42	31	24	56
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>383</b>	<b>272</b>	<b>354</b>	<b>502</b>

**Fuente:** Libros de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

frecuentes disputas entre grupos políticos rivales que terminaban derivando en simples riñas callejeras con heridos, lesionados, contusos y, en algún caso, excepcional, muertos. Este último tipo de actividades, por sus características, son objeto de consideración individualizada más adelante.

Desacato, resistencia, desobediencia, amenazas a la autoridad, etc., constituyen un conjunto de hechos delictivos, de motivaciones diversas, pero con el elemento común de reflejar un comportamiento **agresivo** respecto a la **autoridad local** y a sus símbolos (Alcaldes, Jueces de Paz, Guardias Municipales, Serenos, etc.). Como en el caso de las riñas entre vecinos, origen de muchos de estos delitos, eran, en buena medida, reflejo tanto de las tensiones generadas por la convivencia en núcleos rurales, como de los efectos del alcohol sobre las personas. Al margen de esta caracterización penal, escondían con frecuencia en su motivación actitudes que reconocían en su origen la huella de los graves problemas y fuertes desajustes que afectaban a la sociedad rural.

En varios se engloba todo aquello que resulta **inclasificable** en una aproximación de tipo general como es la que se hace aquí: estafas, daños, accidentes de circulación, delitos electorales, incendio<sup>18</sup>, ejercicio ilegal de la profesión, contra la salud, divorcio (surgidos ya más tarde al entrar en vigor la legislación republicana sobre la disolución matrimonial, en que se trataba de encontrar un culpable), etc. Es una delincuencia muy específica, que presenta un interés marginal desde el punto de vista de las preocupaciones que ahora nos mueven.

<sup>18</sup> El delito de incendio, en sentido estricto delito contra la propiedad, ha sido tradicionalmente una de las más caracterizadas formas de actuación subversiva en el campo que, por las modalidades de concretarse, resulta el más impenetrable a cualquier pesquisa de autoría. Los que aquí aparecen fueron, en realidad, fruto de imprudencias de las que se derivaron daños. Porque el incendio con intencionalidad, el que merecería la calificación de delictivo, frecuente, quedó siempre en el anonimato, confundido con aquellos otros originados por la casualidad.

Mucho es lo que enseña el estudio de esta delincuencia, en tanto refleja las **tensiones** político-sociales existentes en la comunidad, situaciones de la vida colectiva que muestran la pervivencia de hábitos inveterados. Aquí, por razones de espacio, sólo se analiza una parte. Y el centro de interés no es únicamente la cuestión penal, sino también las circunstancias históricas que determinan la propia existencia y significado de la acción delictiva.

## 5. LA DISIDENCIA SOCIO-POLÍTICA: CARACTERIZACIÓN GENERAL

A pesar de la importancia de la cuestión y de lo debatida que ha sido resulta **difícil** lograr una tipificación exacta de los delitos políticos. Reconocía, en los inicios de la Transición, una conocida tratadista del tema que "todavía no se sabe con certeza como distinguir esos delitos de los llamados «delitos comunes»" (Fiestas Loza, 1977: 23). Sin embargo, al margen de la existencia de problemas de conceptualización, en la práctica los distintos ordenamientos penales liberales caracterizaron claramente este tipo de actividades delictivas, en un plano de gran dureza. En definitiva, si bien no se llegaron a definir de manera inequívoca, sin embargo cada situación política tipificó de forma precisa su consideración penal.

La mayor o menor amplitud de su individualización estuvo en función de las características del modelo político vigente. Cuanto más abierto era el sistema más delitos; por el contrario, los regímenes **autoritarios** tendieron a disminuir su nómina, para evitar que pudiesen reclamar el acogerse a sus beneficios un mayor número de individuos. De todas formas, estas precauciones no dejan de ser sutilezas sin mayor trascendencia, pues como ha llamado la atención Tomás y Valiente, frente a la tradición europea, indulgente con el delincuente político<sup>19</sup>, en España se tendió a penar con "más dureza a este tipo de delincuentes que a los comunes, menos peligrosos para el poder establecido"<sup>20</sup>. A partir del Código Penal de 1848, el primero que tuvo realmente vigencia, se comenzaron a considerar como políticos un conjunto de delitos, tales como **rebelión** y **sedición**. Los de orden público quedaron, en principio, en una situación ambigua, aun cuando su finalidad fuese altamente desestabilizadora para el sistema establecido.

Un segundo nivel de dificultades se presenta a la hora de definir lo que se entiende por delitos sociales, incluidos por algunos autores en lo que se ha calificado como "categoría delictiva ambigua" (Fiestas Loza, 1977: 279). En sentido estricto se moverían en el ámbito de las relaciones **capital-trabajo**. Desde 1848 aparecieron tipificados algunos delitos en este campo, aunque de difícil separación, por falta de un marco legal adecuado, de los políticos (huelga/sedición). Pero una vez reconocido, a principios de siglo XX, el derecho de huelga (Ley de 27 de abril de 1909) se produjo una transformación en la cualificación penal. No obstante, de forma imprecisa se seguía interpretando que delitos sociales eran los cometidos con ocasión de las huelgas de obreros, aunque ciertos hechos punibles derivados de la actuación de los huelguistas seguían siendo considerados comunes.

---

<sup>19</sup> Esta benevolencia, de raíz romántica, característica de los países más avanzados de Europa, sufrió un colapso con la llegada del siglo XX. La burguesía, atemorizada por la emergencia del problema social, decidió defenderse. "Incluso las democracias (...) han buscado, con deformaciones en la calificación, elevar las penas contra la criminalidad política, atacándola en su forma de «anarquismo», «terrorismo», «colaboracionismo», etc.", Jiménez de Asúa, L., "El trato a los delincuentes políticos en España, ante los textos de las Naciones Unidas" en *El Criminalista*, V, 2ª serie, Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1961, pp. 54.

<sup>20</sup> Tomás y Valiente, F., "Prólogo" a Fiestas Loza, A., op. cit., p. 19.



Con la Segunda República se introdujo una modificación de las concepciones vigentes en este campo, reflejo de la **nueva sensibilidad penal**. El pensamiento dominante al respecto en las fuerzas de izquierda fue expresado por Jiménez de Asúa: no era posible en teoría diferenciar delitos políticos de delitos sociales, porque tras el cambio de la situación política lo que se buscaba, en realidad, era una transformación de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, la normativa penal estableció algunas diferenciaciones. Así, en el proyecto de Ley ratificando la amnistía de 21 febrero de 1936 se volvía a una consideración no por estricta menos ambigua: los delitos sociales quedaron reducidos al ámbito laboral<sup>21</sup>.

En este trabajo, con carácter meramente **funcional**, utilizamos una tipificación **elemental** que los individualiza como los que se cometen contra el orden social o económico, a diferencia de los políticos que serían los que atentasen contra la forma de Gobierno o el régimen en general. Sin embargo, somos conscientes de que esta distinción no resiste un análisis en profundidad, al margen de que por cuestiones procedimentales pueda resultar conveniente seguir manteniendo la distinción. Los delitos sociales (Hibbert, Ch., 1975), en todo caso, responden a una determinada estructura de la sociedad<sup>22</sup>.

En una coyuntura histórica como fue la de la Segunda República, caracterizada por su intenso **dinamismo** político y social, en la que se vivieron frecuentes y notables fenómenos de disidencia, con una alta capacidad de subversión del orden establecido, la distinción se hace más **insostenible**. Porque en tanto aquellos, en su grado más alto, llevaban aparejado un intento de transformación de las realidades sociales y económicas, de forma explícita en unos casos o implícita o en otros todos postulaban la desaparición del modelo político vigente. Preferimos, por tanto, hablar de delincuencia **socio-política** en general, introduciendo en cada caso las matizaciones pertinentes. Bien entendido que no interesan tanto las cuestiones penales, cuanto el componente histórico de los sucesos, aun cuando son difícilmente separables.

Aquí, por razones de espacio, al margen de cuestiones de ciencia jurídica en las que, obviamente, no podemos entrar, se consideran, de manera empírica, un amplio conjunto de delitos, entre ellos, especialmente, los referidos al orden público<sup>23</sup>. En este sentido, no es necesario insistir en que la corta vida de la Segunda República se vio afectada por muy diversos tipos de actividades subversivas, de finalidad diversa, pero que buscaban su **superación**, como modelo político, y como sistema social. Aunque logró ir sorteando las amenazas, el desgaste fue grande y al final se lograría el objetivo de desestabilizar al régimen. A efectos **expositivos**, desglosamos esta actividad delictiva en diferentes apartados, en función de las circunstancias que rodearon a cada caso y al margen de la calificación penal que merecería en los diferentes procesos que se incoaron.

<sup>21</sup> "«Delitos sociales» eran las transgresiones de la Ley de Huelgas y determinados delitos comunes cometidos o bien por móviles sociales o bien con ocasión de huelgas, conflictos de trabajo u otras situaciones sociales semejantes", Fiestas Loza, A., op. cit., p. 331.

<sup>22</sup> La relación entre nivel de renta y delincuencia, o lo que es lo mismo la incidencia de los factores sociales en el criminalidad es analizada por los psicólogos sociales. Cfr. un enfoque tradicional en Klineberg, O., *Psicología Social*, México, F. C. E., 1973, pp. 391 y ss. Una concepción clásica en Ferri, E., *Sociología criminal*, Madrid, Centro Editorial Góngora, 1913.

<sup>23</sup> La Ley de Orden Público de 1933 establecía como fundamento del orden público "el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Constitución".

## 6. LA DISIDENCIA SOCIOPOLÍTICA: SUS MANIFESTACIONES

Agrupamos los que en este trabajo consideramos delitos socio-políticos en varios bloques, en los que incluimos situaciones con similar contenido penal. Unos tienen una estructura **unitaria**, por la homogeneidad de los casos contemplados, otros, por el contrario, debido a su **complejidad**, reflejo en última instancia de la multiplicidad de variantes que puede tomar el comportamiento delictivo, se desglosan en varios apartados.

### 6.1. LA TENENCIA Y USO DE ARMAS SIN LICENCIA

Los episodios de **violencia** callejera, que tenían en el uso de armas de fuego su más caracterizado complemento, han quedado asociados tradicionalmente, como uno de sus rasgos más distintivos, a la experiencia republicana. Esta violencia, real, fruto tanto del amplio margen de libertades como de los profundos desajustes de la vida nacional, alcanzó una notable incidencia sobre la vida del régimen. Con una fuerte capacidad desestabilizadora, terminó convirtiéndose, para determinados círculos historiográficos, en todo un símbolo destacado de la incapacidad de la República para controlar el orden público y garantizar, con ello, la pacífica convivencia entre los españoles. De esta forma se deslegitimaba al régimen y se justificaba su agitado final.

Sin embargo, las armas de fuego, como medio e instrumento para atentar contra las personas y las cosas, ocuparon un importante papel en las preocupaciones de los gobernantes republicanos. En la vieja normativa penal apenas se trataba el tema y en los códigos del siglo XIX no aparecía recogida ninguna mención al uso de armas, aunque hacían referencia a actividades delictivas en las que se empleaban. En la última fase de vida constitucional del reinado de Alfonso XIII y, especialmente, durante la Dictadura de Primo de Rivera el tema comenzó a recibir un tratamiento específico<sup>24</sup>. Pero fue al llegar la Segunda República cuando el asunto exigió una constante **atención** por parte de los diferentes Gobiernos.

La primera norma en este sentido fue el Decreto de 19 de agosto de 1931<sup>25</sup> que penalizaba el hecho de llevar, sin licencia, fuera del domicilio armas cortas de fuego. Se consideraba necesario y urgente tomar estas medidas **precautorias**, como respuesta a un problema que se iniciaba y que no haría más que incrementarse con el paso del tiempo: la violencia en la calle. Había que evitar que los enemigos del régimen, que no estaban "investidos de autoridad" suplantasen a ésta e intimidasen "con la acción armada al ciudadano de esta España tan llena de nobles ambiciones civiles"<sup>26</sup>. Las formas de poder amparadas en la violencia y el terror resultaban incompatibles con la "lucha en el campo de las ideas", con "la noble pugna de las conciencias". De todas formas el Decreto se entendía como algo provisional, cuya vigencia no debía superar los dos años.

La Ley de 9 de enero de 1932<sup>27</sup>, nutrida del mismo espíritu y dotada de idéntica provisionabilidad, dio mayor amplitud a lo que de manera precipitada se insinuó en 1931. Si bien la parte básica, tenencia fuera del domicilio, era idéntica, ahora se ampliaba la penalidad, al considerar también delictivo la posesión de armas en el propio domicilio y tipificar el delito de **depósito**.

<sup>24</sup> Ley de 2 de agosto de 1923 y Reales Decretos-Leyes de 13 de abril y 14 de octubre de 1924.

<sup>25</sup> *Gaceta de Madrid*, 20-VIII-1931.

<sup>26</sup> Preámbulo del Decreto de 19-VIII-1931.

<sup>27</sup> *Gaceta de Madrid*, 30-I-1932.

Pero estas medidas no fueron suficientes. A los penados por la Ley les era de aplicación la condena condicional, lo que terminó **desvirtuando** su sentido, restando eficacia a la norma y haciéndola ineficaz. La Ley de 4 de julio de 1933<sup>28</sup>, que derogaba la de 9 de enero, ampliaba de manera considerable las penas, introduciendo, además, como elemento agravante, la reincidencia. En este caso las penas podían llegar a 6 años y las multas a 50.000 pts. La intención de los legisladores era dar a los jueces mayores **posibilidades**, al mantener idéntico el límite inferior (para las meras infracciones reglamentarias). Además, se limitaba el beneficio de la condena condicional. En el delito de depósito se producía un agravamiento de las penas, al entenderse que aquí había una intencionalidad delictiva clara, por lo que no cabía pensar en la infracción reglamentaria.

El cambio de orientación política iniciado a fines de 1933 y, sobre todo, los sucesos de 1934 determinaron un nuevo cambio en la legislación. La Ley de 22 de noviembre de 1934 derogó la del año anterior. Como respuesta a la grave crisis que se había conocido en octubre, las penas experimentaron un nuevo **incremento**. Los encartados en este tipo de delito permanecerían siempre en prisión preventiva. La Ley, reflejo de situaciones recientemente vividas, daba una oportunidad a los poseedores de armas, al establecer la posibilidad de su devolución o entrega en los puestos de la Guardia Civil dentro de un plazo limitado.

Otras normas surgidas en esta etapa de la República hacían referencia al uso de las armas de fuego. El Reglamento de armas y explosivos de 13 de septiembre de 1935 insistía en que "nadie podrá llevar armas de fuego sin haber obtenido la correspondiente licencia, expedida por las Autoridades a quienes este Reglamento confiere tal facultad" (Art. 23). Especialmente dura era la Ley de 11 de octubre de 1934<sup>29</sup>, promulgada por el Gobierno Lerroux en medio de los sucesos de octubre y, por tanto, con una extremada preocupación **represiva**. Ahora la pena máxima contemplada, para aquel caso en que resultase alguna persona muerta o con lesiones, era la de reclusión mayor (de 20 años y un día a 30 años) a muerte.

La Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 afectó a la sustanciación de las causas por uso y tenencia de armas. Decretado el estado de prevención o alarma, las Audiencias Provinciales se constituirían en **Tribunales de Urgencia** para juzgar determinados delitos, entre estos los que ahora consideramos. La Ley sufriría diversas modificaciones en las últimas semanas de legalidad republicana, muestra del progresivo deterioro de la convivencia nacional. Uno de estos cambios, el introducido por la Ley de 23 de mayo de 1936<sup>30</sup>, se refería al uso de armas. El artículo 1º de esta Ley modificaba el 3º de la de 1933 y calificaba de acto contra el orden público "los que se cometan o intenten cometer con armas, siempre que tengan un móvil terrorista o simplemente una motivación política o social". Además, la Ley permitía los registros domiciliarios sin mandato judicial, lo que originó el notable incremento de las causas por tenencia ilícita de armas en las últimas semanas de vida republicana.

El interés creciente llevaba aparejado, además, un paralelo incremento de la penalidad, como se aprecia en el cuadro III. Aunque la existencia de causas por tenencia y uso de armas de fuego sin licencia (básicamente cortas) era una realidad incluso antes de la propia República, el desarrollo de ésta determinó un notable y progresivo **incremento** de su número. El delito de tenencia de armas de fuego tuvo una presencia constante a la largo de la etapa republicana en Cáceres.

<sup>28</sup> *Gaceta de Madrid*, 12-VII-1933.

<sup>29</sup> *Gaceta de Madrid*, 12-X-1934.

<sup>30</sup> *Gaceta de Madrid*, 29-V-1936.

**Cuadro III**  
**Consideración penal de la tenencia de armas fuera del domicilio**

Norma	Penas
R.D. 19-VIII-1931	4 meses 1 día a 1 año
Ley 9-I-1932	4 meses 1 día a 1 año
Ley 4-VII-1933	4 meses 1 día a 2 años
Ley 22-XI-1934	2 años 4 meses 1 día a 6 años.

En el cuadro III se recoge la evolución de los casos vistos en la Audiencia. Se aprecia una fuerte progresión durante el primer bienio, culminando en 1933. A partir de ese momento hay un cierto estancamiento, que se mantiene, no obstante, en unos valores relativamente elevados, para relanzarse de forma espectacular en la primavera de 1936<sup>31</sup>, fruto, en buena medida de los continuos registros domiciliarios. El comienzo de la guerra detuvo el proceso, cambiando su sentido. La Audiencia aplicó la legislación con amplitud de criterio, basándose en el principio de la **falta de peligrosidad** de la mayor parte de los encartados. Las peticiones fiscales no fueron en general atendidas, salvo en casos de flagrante delito, en los que la propia defensa aceptaba la pena solicitada por el ministerio público. La legislación preveía esta actuación discrecional de los tribunales a la hora de determinar, a la baja, la entidad de las penas<sup>32</sup>.

**Cuadro IV**  
**Evolución de los casos de tenencia de armas**

Años	Casos
1931	13(7)
1932	25
1933	61
1934	41
1935	41
1936	48
Total	229

**Fuente:** Libro de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

<sup>31</sup> Debe tenerse en cuenta, para calibrar mejor el incremento que se produjo en ese año, que los casos juzgados por el Tribunal de Urgencia corresponden prácticamente sólo al primer semestre y casi todos los procesos tuvieron lugar a los meses de abril(5), mayo (10), junio (7) y julio (13).

<sup>32</sup> El artículo 5º de la Ley de 22 de noviembre de 1934 establecía que «si de los antecedentes del procesado y de las circunstancias del hecho se dedujere la escasa peligrosidad social de aquel, la existencia en contra suya de amenazas graves de agresión ilegítima o la patente falta de intención de usar las armas con fines ilícitos, los Tribunales podrán rebajar las penas señaladas en los artículos anteriores en uno o dos grados».

En el cuadro IV se recoge la pena más frecuente en cada uno de los años de la Segunda República. En total, en estos pleitos se vieron implicadas 263 personas, en su mayor parte, por razones obvias, dedicadas a actividades agrarias. Destacaba como colectivo hegemónico, con un 39 %, el de los jornaleros; a cierta distancia seguía el de labradores, con el 16 %. Los gitanos, tratantes y, en general, vendedores ambulantes también nutrieron de manera notable el grupo de detenidos; la fuerte presencia de éstos colectivos en caminos y carreteras hizo aumentar las armas en circulación. Al margen de esta simple clasificación socioprofesional poco es lo que puede decirse sobre la orientación ideológica de los encartados. Sólo en unos casos muy determinados, los rasgos de la profesión o las circunstancias en que aparecieron las armas permiten avanzar más en este terreno.

**Cuadro V**  
**Pena más frecuente por tenencia de armas sin licencia**

Año	Pena media
1931	2 meses 1 día (7)
1932	4 meses 1 día (12)
1933	4 meses 1 día (48)
1934	4 meses 1 día (30)
1935	4 meses 1 día (26)
1936	2 años 4 meses 1 día (15)

**Fuente:** Libro de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

La edad media de los implicados en estos sucesos era relativamente baja, 34 años. Todos, con alguna excepción, fueron considerados elementos no peligrosos. Sólo en algún caso se trataba de **pistoleros** profesionales, a los que por sus características personales, historial delictivo y riesgo para el mantenimiento del orden público se procuró aislar, aprovechando las medidas de excepcionalidad que establecía la legislación vigente (artículo 71 de la Ley de Orden Público)<sup>33</sup>.

Pero no sólo resulta significativo valorar el incremento del número de causas, el constante ascenso, como se ha visto, de los procesos, sino también es ilustrativo conocer la evolución que conocieron las modalidades de **detección** de las armas. A lo largo de la etapa se experimentó un profundo cambio en la forma en que eran descubiertas e intervenidas. De acuerdo con este indicador, es posible afirmar que domina, hasta 1934, las pesquisas que se pueden calificar de no políticas. Las armas eran recogidas en bailes, tabernas y otros lugares de reunión pública, como medio para **prevenir posibles incidentes**; otro importante número aparecía en riñas vecinales, etc.; por eso los

<sup>33</sup> En 22 de junio de 1935 se vio la causa contra un individuo, de malos antecedentes, considerado pistolero de acción, perteneciente a la Federación Anarquista Ibérica, con destacada intervención en los "planes opuestos a la justicia y al orden", acusado de haber realizado disparos contra unos perros. Aunque fue absuelto del delito por el que se le acusaba, el Tribunal, usando de la facultades que le confería la Ley de Orden Público, decidió que el procesado quedase retenido a disposición del Gobernador Civil en la prisión de la capital, mientras durase el estado de anormalidad. Archivo de la Audiencia Territorial de Cáceres (en adelante A. A. T. de Cáceres), *Libro de Sentencias de lo Criminal de 1935*. Sentencia nº 234, de 22 de junio.

casos son numerosos; luego estas situaciones se van reduciendo y el uso y tenencia tiene un aire más clandestino, aumentan los registros **domiciliarios** (por parte de las Guardia Civil y Cuerpo de Asalto) y los cacheos. Estos, que antes eran fruto de simples medidas de seguridad en bailes y fiestas, se hicieron cada vez más callejeros a medida que la violencia se generalizaba<sup>34</sup>.

Por otro lado, las armas aparecían también en las frecuentes disputas, muy violentas, entre grupos políticos rivales, cada vez más frecuentes en la primavera de 1936, pero con presencia desde los primeros años. En algunos de estos casos es posible conocer, porque se especificaba en los diferentes resultandos, la **ideología** de los grupos enfrentados y se detallaba quienes eran los agresores armados. Todo ello en función de que los sucesos tenían lugar en el contexto de actividades políticas o religiosas muy concretas: procesiones de Semana Santa o manifestaciones del 1º de mayo<sup>35</sup>.

Tras el 19 de julio de 1936 desapareció, del ámbito de competencias de la Audiencia, el delito de tenencia de armas, porque pasó a la **jurisdicción de guerra**. El tema, por su evidente trascendencia en la coyuntura bélica, fue regulado con gran precisión, y con carácter general, por las autoridades militares en el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio<sup>36</sup>, mediante el cual, el «estado de guerra», declarado ya en varias provincias, se hacía extensivo a todo el país. Esto no significa, en modo alguno, que desapareciesen las armas de manos de particulares, simplemente, como esa norma se encargaba de aclarar, se permitió una tenencia selectiva, a los **adictos**, en los primeros momentos eficaces colaboradores de las Fuerzas Armadas en las tareas de control sobre la retaguardia.

En las primeras semanas del conflicto, sin embargo, aún se vieron algunos casos de tenencia de armas en la jurisdicción civil. Unos, la gran mayoría, últimos coletazos procedentes de la etapa de normalidad constitucional, otros, pocos, fruto de la **confusión** de los primeros momentos de vigencia del «estado de guerra»<sup>37</sup>. En todos estos casos, acorde con la excepcionalidad de la situación en que se vivía, la legislación fue aplicada con gran **dureza** y la sentencia recaída fue,

<sup>34</sup> En el contexto de esta violencia hay que situar el alegato defensivo de "miedo insuperable" con el que se trataba de justificar la posesión domiciliaria de 5 pistolas por parte de un encausado. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal de 1935*. Sentencia nº 89, de 2 de marzo.

<sup>35</sup> En Albalá, la manifestación obrera del 1º de mayo de 1936 fue interrumpida por grupos de filiación «fascista» armados; tres de los provocadores fueron condenados a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal de 1936*. Sentencia nº 190, de 26 de mayo.

<sup>36</sup> Artículo 6º: «Se considerarán como rebeldes, a los efectos del Código de Justicia Militar, y serán juzgados en la forma expuesta [por procedimiento sumarísimo] (...) b) Los poseedores de arma de fuego o sustancias inflamables o explosivas; entendiéndose caducadas todas las licencias de armas que no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa Nacional o sus legítimos representantes. Los poseedores de armas, con o sin licencia, quedan obligados a entregarlas en el plazo máximo de doce horas, sin excusa alguna, en el puesto de la Guardia Civil respectivo, donde, en cada caso, podrá convalidarse la autorización para su uso, a discreción del comandante de aquél», Medina, L. y Maraño, M., *Leyes Penales de España conforme a los textos oficiales*, Madrid, Editorial Reus, s/f., p. 647.

<sup>37</sup> La cuestión que se debatía, de gran trascendencia penal, era el momento en que se había conocido en cada lugar la declaración del «estado de guerra» en la provincia, hecho público en Cáceres el 19 de julio. Como estipulaba la consiguiente recogida de armas de manos de particulares en un plazo determinado, obviamente el interés de los detenidos estaba en demostrar que desconocían, porque no se había hecho público todavía en el lugar, lo estipulado en el bando con respecto a las armas de fuego.

casi siempre, la misma: dos años, cuatro meses y un día de prisión menor<sup>38</sup>. Fuerte contraste con las últimas, dos, dictadas por este delito el 18 de julio, antes de romperse en Cáceres la legalidad republicana: dos meses y un día de arresto mayor.

**Cuadro VI**  
**Modalidad de detección de las armas de fuego**

Año	Registro domicilio	Cacheo	Otros
1931	-	2	10
1932	1	9	12
1933	5	33	22
1934	9	21	11
1935	13	12	19
1936	23	20	5

**Fuente:** Libro de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

Delito relacionado con el que se acaba de analizar era la tenencia de materias **explosivas**. Aparecía castigado en la Ley de 10 de julio de 1894, norma fundamental surgida en el contexto de las actuaciones terroristas del anarquismo, que penaba los atentados con explosivos (Núñez Florencio, 1983: 88 y ss.). Aquella vieja norma fue la base legal, durante parte de la experiencia republicana, que permitió juzgar a los frecuentes sucesos delictivos de este tipo. El agravamiento de la situación impulsó al Gobierno, ya en la últimas fases de la experiencia republicana, a introducir una nueva normativa, acorde con la gravedad de los hechos. Significativamente fue la crisis de octubre de 1934 la que obligó al Gobierno a dictar otra norma en este campo (Ley de terrorismo y explosivos de 11 de octubre de 1934).

La norma de 1894 castigaba con muy duras penas al que "atentare contra las personas o causare daños en las cosas, empleando para ello substancias o aparatos explosivos" (Art. 1º). La pena máxima a imponer podía llegar a ser de **muerte** no sólo si de resultas de la explosión alguna persona fuese muerta o herida, sino también si el atentado tuviese lugar en edificio público, lugar habitado o donde hubiese riesgo para las personas, al margen de que resultasen daños. Al llegar la Segunda República fue suprimida aquella máxima pena, que de nuevo introdujo la ley de 1934, poniendo en vigor algunos artículos del Código penal de 1870<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> La última causa de este tipo que vio la Audiencia, constituida en Tribunal de Urgencia, fue en diciembre de 1936 contra tres vecinos de Acebo, a los que la Guardia Civil había encontrado en un registró domiciliario el 22 de julio varias pistolas. A pesar de que la defensa mostró que aquel día aún no se había hecho público en el lugar la declaración del estado de guerra, la durísima sentencia reflejó la gravedad de los momentos que se vivían; la pena impuesta llegó a siete años de prisión mayor para uno de los encartados.

<sup>39</sup> Art. 6: "Para la ejecución de las penas no reguladas en las leyes vigentes se considera que se hallan en vigor los arts. 102 al 105 del Código Penal de 1870 y reforma de 9 de abril de 1900". *Gaceta de Madrid*, 12-X-1934. Estos artículos regulaban el procedimiento para la ejecución de la pena capital: "La pena de muerte se ejecutará en garrote, de día, en sitio adecuado de la prisión en que se hallare el reo y a las

A diferencia de la tenencia de armas, delito con el que frecuentemente aparecía asociado, la posesión de explosivos en sentido estricto, tenía una **intencionalidad** delictiva más clara. Ahora bien, los procesos incoados en Cáceres responden a dos situaciones diferentes. Por un lado, en unos casos se trataba de personas (farmacéuticos, comerciantes, etc.) autorizados para vender explosivos, pero que, por diversas razones, incumplían las normas administrativas al uso. Su procesamiento, puramente anecdótico, carece de interés histórico o penal. En otros, los de verdadero interés, la tenencia aparecía acompañando a actividades delictivas muy concretas, rebelión, sedición, etc, que, por sus características, se analizan más adelante de manera conjunta.

## 6.2. INJURIAS AL REGIMEN Y A SUS GOBERNANTES Y SIMBOLOS

Bajo esta caracterización genérica se incluyen muy distintos episodios delictivos. Los ataques y **descalificaciones** verbales y escritas al régimen republicano y a sus políticos y, paralelamente, la glorificación de sus enemigos y de otras experiencias político-sociales, tomadas como paradigmáticas, fueron situaciones que se conocieron con frecuencia a lo largo de los cinco años de vida republicana. Prácticamente estuvieron presentes desde los primeros momentos.

Las descalificaciones verbales tenían muy distintas orientaciones y, en relación con ello, intencionalidad. Por lo mismo, sus manifestaciones adquirían múltiples modalidades. Dado lo **antagónico** de los planteamientos sociales y políticos que defendían unos grupos y otros, los elementos del discurso descalificador eran muy contrapuestos. El código de signos era, además, elemental, reducido al uso de unos pocos conceptos y palabras, cada vez más simples, pero cargados de inequívocos contenidos.

Los gritos considerados subversivos surgían tanto en el contexto de desórdenes públicos, originados bien por enfrentamientos entre grupos, bien por **amotinamientos**, como a consecuencia de disputas motivadas por la ingestión de alcohol, cuando se producía un natural relajamiento de la autocensura y del control sobre sí mismo, lo que permitía dar rienda suelta a las tensiones acumuladas.

Con frecuencia, el delito quedaba reducido, en el aspecto verbal, a un simple cruce de vivas, mero intercambio de **fidelidades**, mediante los que los diferentes grupos hacían profesión de fe de sus creencias político-sociales. Sin embargo, en estos casos las palabras solían ir acompañadas por las agresiones físicas entre los adversarios políticos, degenerando el incidente en desórdenes públicos.

Cada corriente tenía sus **palabras-símbolo** mediante las que identificaba sus propuestas. En uno u otro sentido el régimen republicano era siempre la víctima de las descalificaciones (de ahí la consideración de delictivos que merecían estos actos), bien de manera global, bien la persona de sus más destacados protagonistas<sup>40</sup>. En unos casos, superado por la izquierda, en otros, por la derecha. El discurso de izquierda tenía varias frases identificativas, cuyos rasgos más destacados eran tanto la presencia de **elementos foráneos** (Rusia y los Soviets), como el carácter **positivo** de sus gritos, adhesiones a modelos políticos o experiencias de cambio radical de la sociedad («Revolución

dieciocho horas de notificarle la señalada para la ejecución, que no se verificará en días de fiesta religiosa o nacional" (Art. 102).

<sup>40</sup> En unos desórdenes públicos, el 26 de febrero de 1936 un individuo dio estos gritos: «¡ Muera el Presidente !, ¡ Muera Azaña ! ». Fue absuelto por falta de pruebas. A. A. T. de Cáceres. *Libro de Sentencias de lo Criminal, 1936*, Sentencia nº 103 de 21 de marzo.



Social»). Más reducido era aún el falangista, cuyo símbolo identificativo era la palabra «Fascio» y en el que abundaban los gritos negativos («Abajo la República»<sup>41</sup>). Aunque desde la óptica de los planteamientos hostiles a los postulados de izquierda lo más frecuente era la llamada a las nuevas soluciones autoritarias, no faltaron, en los primeros momentos, los recuerdos al régimen caído<sup>42</sup>.

Tampoco fue infrecuente la descalificación global de las personas y del régimen en un tono satírico, pero ferozmente corrosivo. Una modalidad destacada de esta última fueron los «Diez mandamientos de la República»<sup>43</sup>, que valieron a un ambulante rapsoda, en los últimos días de la República, un proceso, sentenciado ya en plena Guerra Civil, del que, significativamente, salió absuelto por la Audiencia (ya el fiscal había rebajado la calificación del hecho a mera falta contra el orden público).

Los instrumentos del Estado también se veían afectados por estas situaciones. Las fuerzas de orden público eran objeto de insultos y descalificaciones verbales. En ello se reflejaba la dialéctica de la lucha de clases. Los trabajadores mostraban su repudio a la actuación de unos guardianes del orden público, a los que consideraban meros servidores del Estado Liberal-burgués. De forma más o menos explícita esta acusación quedaba puesta de manifiesto con frecuencia en los altercados en los que debían intervenir, al margen de su contenido reivindicativo o no. Reflejaban un pensamiento asumido con carácter general por amplias capas del proletariado. No sólo la Guardia Civil se veía afectada, sino también los Guardias de Asalto<sup>44</sup>.

La caracterización penal de estas actividades era variable. Podía oscilar entre desórdenes públicos y simple desacato, pasando por injurias. Y de acuerdo con ello iba la importancia de la pena<sup>45</sup>. Como era frecuente que la cuestión origen del suceso se complicase con otras actuaciones

<sup>41</sup> En Alcuéscar uno gritó, como respuesta al intento de detención protagonizado por el teniente de alcalde al que comentó "nosotros los fascistas tenemos más huevos que esos canallas", «¡ Viva el Fascio !, ¡ Abajo la República ! ». Fue condenado por la Audiencia a dos meses y un día. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1936, Sentencia nº 262 de 4 de julio.

<sup>42</sup> En la madrugada del 31 de agosto de 1932 en la Plaza de Santiago de Cáceres un borracho gritó « ¡ Abajo la República que ha engañado miserablemente a los obreros ! », « ¡ Viva la Monarquía ! ». Como no había nadie en la calle se entendía que no pudieron ser dichas con ánimo de producir rebelión o sedición. Fue absuelto del delito, que se consideró mera falta. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1933, Sentencia nº 52 de 13 de febrero.

<sup>43</sup> Estos Diez Mandamientos tenían un contenido inequívoco, claramente descalificador para el régimen, como puede comprobarse: 1º. República sin dinero; 2º. Republicano todo el mundo; 3º. Echar a reñir patronos y obreros; 4º. La República para unos cuantos; 5º. La Reforma Agraria nadie la ha visto; 6º. Darle fuego a iglesias y conventos; 7º. La contribución que aprieta; 8º. Tanto aprieta que revienta el corcho; 9º. Quitarle fuerza a los hombres y dársela a las mujeres; 10º. No tenemos vergüenza si votamos otra vez.

<sup>44</sup> Un electricista de Plasencia fue condenado a dos meses y un día de arresto mayor por gritar a unos Guardias de Asalto: «¡ Defensores del capitalismo y asesinos de los obreros ! », A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 63 de 12 de febrero.

<sup>45</sup> Un caso destacado por la cuantía de la pena fue el que ocurrió el 29 de julio de 1934. Un labrador de Villar de Plasencia, en estado de embriaguez, se vio encausado por injurias graves al Jefe del Estado en una taberna. Sus palabras fueron: "El Presidente de la República no debía estar donde está, ni el Gobierno tampoco porque son unos canallas que no han hecho más que aumentar la Guardia Civil y la Guardia de Asalto". El Fiscal pidió seis años y un día de prisión mayor, pero la Audiencia sólo le condenó a un año. A. A. T. Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 227 de 28 de agosto.

delictivas, la penalidad podía incrementarse de forma paralela<sup>46</sup>. En el ámbito rural los ataques verbales a los enemigos políticos solían derivar en agresiones de obra<sup>47</sup>.

La otra modalidad de materializarse injurias y ofensas era la **escrita**. Se concretó, sobre todo, en el reparto de hojas clandestinas y pasquines. El reparto de hojas incitando a la comisión de determinadas actividades (rebelión) o condenando la actuación pública de políticos republicanos, de responsabilidad nacional fue una actividad frecuente. En este caso, toda la propaganda localizada, considerada subversiva, era claramente de **izquierda**, por lo que se desarrolló, sobre todo, en el segundo bienio republicano. Procedía de partidos políticos y organizaciones proletarias que criticaban a los gobernantes de la etapa radical-cedista. La visita de los más destacados políticos nacionales a la provincia se aprovechaba para manifestar la oposición al rumbo que había tomado el régimen<sup>48</sup>. Sin embargo, durante el primer bienio también estuvo presente una crítica de izquierda que denostaba la actuación pública de algunas autoridades a las que, se acusaba de no representar adecuadamente los intereses de la izquierda<sup>49</sup>.

El contenido de estos escritos y pasquines estaba nutrido de un duro lenguaje, de inspiración básicamente **comunista**<sup>50</sup>. Las autoridades locales (alcaldes y jueces municipales) también

<sup>46</sup> En Montánchez en la noche del 14 de abril de 1933 el Alcalde ordenó la detención de uno que había gritado, en unión de otros 30-40 obreros, «¡ Viva la República!, ¡ Viva Rusia!, ¡ Viva el Comunismo!». El hermano del detenido, al enterarse de lo sucedido, se dirigió al Alcalde al que insultó: «¡ Cacique!, que el había dado también los gritos y los repetía, ¡ Viva Rusia!, ¡ Viva el Soviet!». Se le encontró, además, una navaja. Reo de atentado fue condenado a un año y un día y 250 pts. de multa. A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1933, Sentencia nº 207 bis de 29 de septiembre.

<sup>47</sup> Siete jornaleros de San Martín de Trebejo fueron procesados por desórdenes públicos y condenados a un mes y un día, porque en la noche del 6 de marzo de 1935 se situaron frente a la casa de un vecino y, al grito de «¡ Viva la Revolución ! », comenzaron a apedrear el edificio. A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 125 de 5 de abril.

<sup>48</sup> En la noche del 5 de abril de 1935, víspera anunciada de la visita de Alejandro Lerroux, para asistir a los actos en su honor, arrojó un albañil en la Avenida de la República de Cáceres varios pasquines que literalmente decían «Trabajadores: el criminal de Lerroux quiere humillarnos con su presencia, manifestémonos en señal de protesta», fue condenado por desacato a dos meses y un día de arresto mayor. A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 170 de 4 de mayo.

<sup>49</sup> Fue el caso de un violento escrito contra el Gobernador Civil de la provincia, impreso y repartido por un vecino de Valdefuentes, condenando su actuación pública. La descalificación de la obra de aquella autoridad era inmisericorde, la provincia vivía bajo una dictadura sangrienta de tipo "martinezanidista". El autor fue condenado por desacato a dos meses y un día de arresto mayor. El Tribunal entendió que en el escrito se ejercía no sólo el derecho a la crítica que asistía a todo ciudadano, sino que se traspasaban los límites racionales y legales. A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1932, Sentencia nº S. 64 de 1 de abril.

<sup>50</sup> En la noche del 1º de mayo de 1935 se repartieron estos tres pasquines por calles y plazas de la ciudad de Cáceres:

«Trabajadores. Se ha dado un caso inaudito en la Historia política de España. Nunca en la Monarquía estuvieron suspendidas las garantías de los españoles siete meses seguidos. Les hacía falta a estos canallas que se llaman republicanos hacer esto, para ahogar las ansias de revolución en sangre proletaria. No se lo perdonéis. Levantaos contra ellos. Viva la Revolución Social»

«Trabajadores. Hoy ha sido el 1º de mayo. Nunca visteis durante el Reinado de los Borbones un 1º de mayo tan alejado de la realidad, porque nunca presenciasteis la suspensión de la expresión de vuestros sentimientos proletarios. Hoy unos criminales al servicio de la burguesía que se hacen llamar

fueron objeto de la descalificación. Estos actos mostraban tanto el rechazo a ciertas situaciones políticas como el deseo de subvertir violentamente la legalidad, descalificando todo un sistema de gobierno. Además, incitaban a la comisión de actos contrarios, en el ámbito local, a la buena legalidad republicana. Los repartos de hojas en las que se excitaba a la **rebelión** se conocieron en varios pueblos. En otras ocasiones se trataba de la distribución de publicaciones periódicas conocidas, pero clandestinas por suspensión gubernativa. Dadas las características que concurrían en estos delitos (autoría desconocida, reparto nocturno), no siempre pudo probarse la participación de los acusados. De ahí que varios de los procesos terminaran con la absolución de los encartados<sup>51</sup>. Sin embargo, en otros casos, cuando se lograba probar la actuación delictiva, el repartidor, algún militante o simpatizante, debía hacer frente a las responsabilidades penales (generalmente dos meses y un día)<sup>52</sup>.

Las dificultades de difusión que encontraba el ideario comunista (Sánchez Marroyo, 1990) forzaba a sus propagandistas a actuar de forma **semiclandestina** en plena República, procurando hacer borrar las huellas de su identidad. En este sentido, el 18 de marzo de 1935 eran juzgados cuatro destacados comunistas de Cáceres acusados de uso de nombre supuesto, publicación de hojas clandestinas y de delito contra la forma de Gobierno. Sólo pudo probarse que uno de ellos venía utilizando públicamente, desde su regreso de Madrid, a fin de evitar las persecuciones por sus ideas comunistas, otra identidad. Delito que le supuso dos meses y un día de cárcel y 500 pesetas de multa<sup>53</sup>. Algunos de estos personajes, muy comprometidos con el ideario marxista, que ahora, bajo el ordenamiento penal de la República, fueron absueltos o condenados con leves penas de

republicanos os impiden vuestras expansiones naturales, por temor a ver en vuestras manifestaciones el efectivo de vuestra fuerza. Por suspenderlas les deja la burguesía robar las arcas del Tesoro descaradamente. Estos son los efectos del 9 de noviembre: Votad a las derechas! ¡Votad contra el marxismo!»

«Trabajadores. Porque unos hermanos nuestros quisieron defender las conquistas logradas por el proletariado, los asesinos lerrouxistas llevaron a Asturias las hordas vandálicas del Tercio. Los asesinos del mundo entero, con licencia de quien era más criminal que ellos, el Gobierno, apuñaló hombres, asesinó niños, violó mujeres y niñas y arrasó pueblos y aldeas. Este es el pago mujeres proletarias del uso que disteis a vuestro voto. Revelaos con energía contra estos crímenes. Ayudar a vuestros hermanos a hacer la Revolución Social».

Para el Fiscal se trataba de un delito de provocación a la rebelión por medio de hojas impresas, lo que fue asumido por el fallo: dos meses y un día. Los cinco acusados hablaron de que fueron objeto de malos tratos (lo que a su vez les conduciría, una vez iniciada la Guerra Civil, a un juicio por desacato). A. A. T. de Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 224 de 6 de junio.

<sup>51</sup> El Tribunal de Urgencia absolvió a dos vecinos de Jaraíz, pues no pudo probarse que fueran los autores del reparto de hojas clandestinas excitando a la comisión del delito de rebelión, A. A. T. Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 119 de 27 de marzo.

<sup>52</sup> El 19 de abril de 1935 se repartieron en Aldea del Cano varios números del periódico clandestino «Combate» en el que incluían trabajos condenando, con un inconfundible lenguaje, la actuación gubernamental ante los sucesos de Asturias: «Por otra parte la reacción monárquica vaticano-fascista quiere aplastar a sangre y fuego el creciente espíritu de las masas. Los Tribunales Militares están condenando a muerte a decenas de obreros revolucionarios; las torturas continúan, las persecuciones se intensifican. En este ambiente de violencia y crímenes inauditos la reacción prepara la instauración de una dictadura terrorista(...) El sanguinario Gobierno de Lerroux-Gil Robles...». El acusado fue condenado por provocación a la rebelión a dos meses y un día. A. A. T. Cáceres *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 225 de 6 de junio de 1935.

<sup>53</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 107 de 18 de marzo.

reclusión, encontrarían grandes problemas para salvar la vida tras el 19 de julio de 1936<sup>54</sup>.

Relacionado con las que aquí se analizan, en tanto ataques o injurias a una institución, otro tipo de actividad delictiva era la que afectaba a la **Iglesia** y a sus locales, que aparecía recogida bajo diversas calificaciones penales: atentado contra el libre ejercicio de los cultos, atentado, etc. Tuvo varias manifestaciones. Podía tratarse de un mero altercado verbal, todo lo insultante posible para la institución, sus símbolos y valores<sup>55</sup>, o de un intento de agresión contra el templo<sup>56</sup>. En este caso podía tratarse, en ocasiones, como ocurría con la tenencia de explosivos, de un aspecto más en el contexto de un movimiento sedicioso.

### 6.3. REBELIÓN Y SEDICIÓN

Se trata de los dos delitos más genuinamente socio-políticos, como tales considerados desde los primeros ordenamientos penales liberales, en tanto suponían, en distinto grado, un intento de **alteración violenta** de determinadas realidades sociales y políticas. La distinción penal resultaba en la práctica del comportamiento colectivo, con frecuencia ambigüamente tumultuario, difícil de concretar. La caracterización penal de ambos delitos **varió** durante la Segunda República, en función de que en sus cinco años de vida estuvieron en vigencia dos Códigos Penales distintos, el de 1870, hasta finales de 1932, y el de 1932, desde diciembre de este año. Sin embargo, los casos que aquí interesan no se vieron afectados porque todos ellos tuvieron lugar a partir de 1933. La clasificación penal los incluía entre los delitos contra el orden público. El **Código Penal** de 1932<sup>57</sup> caracterizaba a la rebelión: "son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Constitucional". La sedición se definía afirmando que eran reos de este delito: "los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales" cualquiera de estos objetos:

- 1-Impedir la **promulgación** o ejecución de las leyes o la celebración de las elecciones.
- 2-Impedir a cualquier autoridad el libre **ejercicio** de sus funciones.
- 3-Ejercer algún acto de **odio** en la persona o los bienes de alguna **autoridad**.
- 4-Ejercer algún acto de odio en la persona o los bienes de algún **particular**.
- 5-**Despojar** de sus bienes a los ciudadanos.

Desde el punto de vista histórico, son los más **interesantes** de analizar por las modalidades que recogen y su íntima relación con los movimientos sociales y el tema de la conflictividad política: rebelión, sedición, atentado, etc. Su concreción más característica obedeció a directrices

<sup>54</sup> Uno de los ahora juzgados, Juan Guillén Moreno, destacado dirigente comunista, que fue absuelto, perecería asesinado en Cáceres el 17 de agosto de 1936 (Fue inscrito en el Registro Civil, como desaparecido, en 1944).

<sup>55</sup> En Guadalupe, en la noche del 29 de noviembre de 1933, cuando se celebraba un acto solemne en su Monasterio, con la presencia de altas dignidades de la Iglesia, un vecino interrumpió el acto con gritos y blasfemias («mentiras», «no hay Dios», «no hay Virgen», «aquí no hay más que putas»). A pesar de que la causa se vio en diciembre de 1936, la Audiencia le condenó a dos meses y un día de arresto mayor y 1.000 pesetas de multa.

<sup>56</sup> El 9 de abril de 1936, en un fuerte tumulto, se intentó por un grupo de individuos quemar la Iglesia de Pasarón. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1936, Sentencia nº 355 de 25 de noviembre. La sentencia se vio afectada por lo excepcional de las circunstancias que se vivían en aquellos momentos: 2 años 4 meses y un día.

<sup>57</sup> *Gaceta de Madrid*, 5-XI-1932.

**nacionales**, lo que determinó el que se concentraran en diversos episodios, muy localizados, además, en el espacio. Por otra parte de estos sucesos se derivaron las más fuertes sanciones para los encartados. Distinguimos tres grandes cuadros de actuación colectiva, de recia personalidad histórica y delictiva, a los que añadimos otro grupo de sucesos aislados, que reflejan nuevas manifestaciones de disidencia socio-política.

### 6.3.1. *Los sucesos anarquistas de diciembre de 1933.*

El levantamiento anarquista de diciembre de 1933 conoció algunas notables manifestaciones en Extremadura. La más destacada, por sus trágicas secuelas de heridos y muertos, fue la que tuvo por escenario a Villanueva de la Serena, con la sublevación del sargento Pío Sopena. En la provincia de Cáceres también se vivieron algunos episodios de violencia, aunque sin alcanzar la entidad de aquellos. Se localizaron en los enclaves y comarcas en los que la C.N.T. había logrado cierto arraigo. Eran núcleos minoritarios, pero eficaces y activos, que protagonizaron los más importantes procesos de delincuencia política de la Alta Extremadura durante los años de la Segunda República. Ya nos hemos referido a la presencia de los enclaves anarquistas en las comarcas de Navalmoral de la Mata y Plasencia (Sánchez Marroyo, 1990), que fueron los que dieron vida a estos notables episodios de subversión del orden republicano. La Audiencia de Cáceres, constituida en **Tribunal de Urgencia**, comenzó a depurar responsabilidades a los pocos días de los sucesos. Los acontecimientos más graves tuvieron por escenario la localidad de Navalmoral de la Mata. Sin embargo, el primer juicio tuvo lugar el 22 de diciembre de 1933 contra un jornalero de Oliva de Plasencia acusado de «rebelión y tenencia ilícita de armas»<sup>58</sup>. Nada más comenzar el nuevo año, el 2 de enero de 1934 comenzaron a revisarse en la Audiencia las causas incoadas en los Juzgados de Primera Instancia contra los encartados en los sucesos ocurridos en los dos núcleos principales: Plasencia y Navalmoral de la Mata. Se trataba de juicios **masivos**, en los que se vieron implicados numerosos vecinos de aquellas comarcas.

Dos fueron los episodios que determinaron la exigencia masiva, a los encartados, de responsabilidades penales. En Plasencia, el 8 de diciembre de 1933, elementos afiliados a la C.N.T. (algunos ya con antecedentes penales, condenados por tenencia ilícita de armas) se concertaron, en lenguaje judicial, "para llevar a cabo un plan revolucionario a fin de alzarse públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Constitucional con objeto de proclamar el comunismo libertario, destituyendo al Jefe del Estado y a toda la organización estatal". Tan grandes proyectos quedaron **reducidos** en la práctica a la explosión de un petardo en la vía férrea que no ocasionó daños. El Fiscal consideró que se trataba de un delito de rebelión y conspiración y, acorde con ello, solicitó para uno de los implicados más de treinta años de cárcel. El Tribunal lo condenó, como reincidente por tenencia de armas, por un delito de conspiración para la rebelión a tres años, seis meses y veintiún días de prisión menor<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> El hecho delictivo consistió en que el 10 de diciembre de 1933 cuando en el pueblo de Oliva varios individuos, ostentando la bandera de la CNT y FAI, alteraban gravemente el orden público, C dando además gritos de « ¡Viva la Revolución !» llegó en dicho momento el procesado e hizo un disparo al aire con revólver. Fue condenado por desorden público y tenencia ilícita de armas a un año, dos meses y un día de arresto mayor. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal, 1933*, Sentencia nº 268 de 22 de diciembre.

<sup>59</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal, 1934*, Sentencia nº 2 de 2 de enero.

El segundo episodio tuvo lugar en Navalmoral de la Mata. En la noche del 9 al 10 de diciembre de 1933 un numeroso grupo de individuos perteneciente a la C. N. T. se reunió "alzándose pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza y, por consiguiente, fuera de las vías legales, que la autoridad local no actuase libremente en el ejercicio de su cargo y para ejercitar actos de odio y venganzas contra los vecinos de dicha villa y bienes de los mismos, por conceptuarlos responsables del estado precario y de penuria que atravesaba la clase obrera". Lo que se pretendía, como en Plasencia, era destituir al Jefe del estado e implantar el **comunismo libertario**. El movimiento no llegó a más al ser dominados los revoltosos por la fuerza pública. Realizaron los siguientes hechos: A) Un grupo provisto de armas cortas y largas y cócteles Molotov, al margen de cualquier movimiento revolucionario, se dirigió al Garage del Oeste donde cogieron 270 litros de gasolina, dominando a los empleados. Cargaron la gasolina en un camión y se dirigieron a la ermita de las Angustias que intentaron quemar. Lanzaron cócteles Molotov contra la casa de un vecino y se produjo un intercambio de disparos. Otro grupo intentó quemar uno de los templos de la villa y la casa del administrador del Conde de Güell; B) otros grupos cortaron las líneas telegráficas y telefónicas; C) varios deambularon armados por las calles, secundando el movimiento sedicioso; D) otro grupo distribuyó varias bombas que habían sido almacenadas para la ocasión. Para el fiscal era una rebelión, con robo, incendio frustrado, tenencia de explosivos y de armas, etc.

En estos juicios, masivos unos, individuales otros, los encartados recibieron un **desigual** tratamiento penal, de acuerdo con las muy distintas acusaciones que pesaban sobre ellos: rebelión, tenencia y fabricación de explosivos, encubrimiento de rebelión, sedición, disparos, inducción a la rebelión, delitos contra la Constitución, robo, incendio, conspiración para la rebelión, colocación de explosivos, proposición para la rebelión, etc. Los dirigentes y algunos que eran ya reincidentes fueron condenados, por sedición, a largas penas de cárcel, de la que saldrían antes de extinguir la condena gracias a la amnistía de febrero de 1936. De los 46 juzgados el día 6 de enero, la Audiencia condenó a 17 por sedición a cuatro años de prisión menor; a otros 8 por el mismo delito a dos años; otros 12 por tenencia de explosivos a dos años, cuatro meses y un día; a otros 13 por tenencia ilícita de armas a un año y a 8 por infracción de la ley de caza a una multa de 20 pesetas<sup>60</sup>

La pena más alta por estos sucesos se impuso en un nuevo juicio a fines de enero. En él un vecino de Navalmoral, Jesús López Vicente, acusado de dirigente, fue condenado por sedición como **caudillo** a ocho años y un día más un año por tenencia ilícita de armas; el otro encartado fue condenado también a largas penas: dos años y once meses por sedición y dos años cuatro meses y un día por tenencia de explosivos<sup>61</sup>.

En el otro juicio masivo celebrado contra 21 individuos de Plasencia por rebelión también se dictaron muy **diversas** penas de prisión, aunque varios fueron absueltos. Las cuatro bombas o petardos de fabricación artesanal colocadas (dos en la línea férrea, uno en la telefónica y otro en los depósitos del agua), mediante los que pretendían concretar los "actos de odio y venganza contra la burguesía", no causaron daños. La Audiencia condenó al principal dirigente obrero, Bernardo Dorado García a más de cuatro años de cárcel (por conspiración para la sedición, un año y siete meses y por colocación de explosivos, tres años y un día). Otros recibieron diferentes penas de tres años y un día por fabricación y colocación de explosivos<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 6 de 6 de enero.

<sup>61</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 50 de 31 de enero.

<sup>62</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 10 de 10 de enero.

**Cuadro VII**  
**Causas vistas por el levantamiento anarquista de 1933**

Fecha causa	Encartados	Sucesos
22-XII-1933	1	Oliva de Plasencia
2-I-1934	2	Plasencia
3-I-1934	2	Peraleda de la Mata
3-I-1934	5	Valdeobispo
6-I-1934	46	Navalmoral de la Mata
8-I-1934	1	Peraleda de la Mata
10-I-1934	21	Plasencia
11-I-1934	3	Oliva de Plasencia
12-I-1934	2	Montehermoso
13-I-1934	6	Peraleda de la Mata
23-I-1934	4	Oliva de Plasencia
31-I-1934	2	Navalmoral de la Mata

**Fuente:** Libro de Sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres (Criminal).

Algunos, a los que no se pudo probar su participación en los sucesos, fueron absueltos. Aunque esta falta de culpabilidad no fue impedimento para que, en ciertos casos, se les aplicasen las **medidas de seguridad** previstas en las situaciones de excepcionalidad. De esta forma, unos fueron retenidos en la cárcel a disposición del Gobernador Civil, otros quedaron sometidos a la vigilancia de la autoridad<sup>63</sup>. Los registros en los domicilios de los sospechosos permitieron descubrir no sólo armas y explosivos, sino también todo tipo de símbolos y propagandas. En este sentido, a un vecino de Plasencia, además de cargadores de fusil y varios metros de mecha, se le incautaron en casa 20 cuadros alegóricos de la Revolución Social.

### 6.3.2. *La huelga campesina de junio de 1934*

Aunque se trató de un conflicto **laboral** y, por tanto, su tipología penal respondería a las características del delito social, tuvo unas connotaciones **políticas** indudables. Fue un pulso entre las fuerzas de izquierda y el gobierno de centro-derecha. Su importancia en la corrección del rumbo de la Segunda República fue algo reconocido desde antiguo (Jackson, 1976: 416 ss.). En Extremadura el conflicto, parcialmente conocido a través de la prensa, halló importante eco, más destacado en Badajoz que en Cáceres. Los métodos expeditivos utilizados por el Ministerio de la Gobernación llevaron al fracaso a la huelga general.

Las repercusiones penales se movieron en tres planos:

a) **Propaganda subversiva**. Formalmente se trataba del reparto de llamamientos a participar en la huelga del 5 de junio, aunque la valoración fiscal fue mayoritariamente de inducción o

<sup>63</sup> Así ocurrió en el juicio contra dos vecinos de Montehermoso acusados de querer prender fuego a la Iglesia y Ayuntamiento del lugar; no se pudo probar esta acusación, pero sí que habían realizado actividades contrarias al orden público, por lo que quedaron a disposición de la autoridad gubernativa, uno en la cárcel. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 14 de 12 de enero.

excitación a la sedición. En casi todos los casos conocidos el autor de los escritos era el partido Comunista. El contenido de los textos fue calificado de "total y completamente subversivo". Aunque los manifiestos no siempre llegaron a ser repartidos, por la vigilancia a que se sometían los paquetes remitidos por el correo<sup>64</sup>, lo cierto es que en varias localidades (Sierra de Fuentes, Madrigalejo, etc.) se distribuyeron estas hojas clandestinas, dirigidas a los campesinos, excitándolos, según la justicia, a la «sedición y a la Revolución Social» y llenas, además, de injurias a las autoridades, especialmente al Ministro de la Gobernación. Tampoco fue siempre posible encontrar a los autores del reparto de los escritos y el Tribunal de Urgencia no aceptó de forma mecánica las alegaciones fiscales. Incluso los detenidos con algunas hojas en su poder fueron absueltos, porque no se vio delito en la mera posesión de los llamamientos clandestinos.

b) **coacciones a los que no secundaban la huelga.** Se trata de un delito tradicionalmente presente en el ámbito agrario, que se vio incrementado en los momentos de graves tensiones laborales<sup>65</sup>. Con motivo de la huelga de campesinos se sucedieron diversos actos de esta tipo, cuya gravedad penal estuvo determinada, en ocasiones, por las circunstancias que rodearon a los hechos, que complicaron el cuadro delictivo<sup>66</sup>.

c) **Rebelión.** En los momentos previos a la huelga general campesina se produjeron unos sucesos que, si bien la calificación judicial los situó en un plano más trascendente, hay que entender en el contexto de los preparativos de aquel conflicto. El 15 de octubre de 1934 se celebró la vista de la causa por conspiración para la rebelión contra Julio Durán Pérez, ex-alcalde de Plasencia, Presidente de la Agrupación Socialista de la ciudad y delegado del partido en la región del Tajo. Se le acusaba de que a últimos de mayo y primeros de junio de 1934 se encargó de "dirigir un movimiento revolucionario al objeto de implantar la «Dictadura del Proletariado», derribando al Gobierno legalmente constituido y despojando a los ministros de la República de sus facultades constitucionales". Al efecto, según la acusación, se puso en contacto con los elementos directivos de las Casas del Pueblo de la zona, exponiéndoles su plan para que cooperasen con él con armas y bombas. El movimiento, sin embargo, no llegó a estallar. El Tribunal de Urgencia aceptó la petición fiscal y fue condenado, por el delito de proposición para la rebelión, a un año, ocho meses y veintiún días de prisión menor<sup>67</sup>. Haciendo buena la afirmación de Jackson sobre la particular

<sup>64</sup> El 5 de junio de 1934 un jornalero de Garrovillas fue detenido por la Guardia Civil cuando acababa de retirar un paquete de Correos que contenía 700 hojas dirigidas a los obreros y campesinos de España, sin imprenta ni firma, suscrito por el Partido Comunista de España. El Fiscal pidió seis meses, por excitación a la sedición, pero fue absuelto porque "el mero hecho de recoger el procesado un paquete, que en Correos venía a él dirigido sin la práctica de otros que aunque por el contenido de aquél cabe imaginar, es lo cierto que bien por la previsión de las autoridades o por su propia intención no llevó a efecto", A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 156 de 19 de junio.

<sup>65</sup> Los constantes conflictos laborales en el campo a lo largo de la Segunda República dieron lugar a numerosas actuaciones de este tipo, como se estudia más adelante.

<sup>66</sup> Así ocurrió en Portezuelo, donde un numeroso grupo de jornaleros se presentó en una dehesa donde se hallaba el propietario, juez municipal, con dos jornaleros contratados. Se coaccionó a los que trabajaban, forzándolos a secundar la huelga por las buenas o por las malas. El juez mandó retirarse a los huelguistas, pero hubo que cesar el trabajo. El Tribunal de Urgencia condenó a los cuatro jornaleros encartados por falta de respeto y desobediencia a 100 pts. de multa. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 175 de 12 de julio.

<sup>67</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 290 de 15 de octubre.



inquina que parecía tener el Ministro de la Gobernación contra los socialistas, volvió a ser procesado por reunión clandestina en unión de otros 12 jornaleros y absuelto en 22 de octubre de 1934<sup>68</sup>.

### 6.3.3. *Los sucesos de octubre de 1934.*

Estos acontecimientos tuvieron en la provincia de Cáceres una repercusión penal, en lo que conocemos, muy **exigua**. Sin embargo algunos movimientos se desarrollaron en la provincia. Su escasa entidad quedó puesta de manifiesto en las reducidas penas impuestas en las causas se vieron en la jurisdicción civil. Aunque se celebraron diversos procesos, no siempre pudo probarse que se produjeran los actos subversivos que el Fiscal presentaba. En este sentido, el 28 de marzo de 1935 se vio la causa contra cinco vecinos de Ahigal por desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas. No pudo probarse que el 7 de octubre se profirieran gritos subversivos que produjesen grave alteración del orden en la localidad. Sólo se condenó a tres a los que los Guardias de Asalto ocuparon armas, para cuyo uso carecían de licencia<sup>69</sup>.

Pero, como decimos, en diversos lugares de la provincia tuvieron lugar en octubre de 1934 desórdenes públicos de muy diferente entidad. En Torremocha, un grupo de individuos recorrió las calles del pueblo el 5 de octubre portando una «bandera comunista», provocando con su actitud una alteración del orden público que obligó a requerir la presencia de la Guardia Civil. Fueron condenados tres de los encartados por desorden público a la pena de cuatro meses<sup>70</sup>. En Arroyomolinos de Montánchez se produjeron cortes en las líneas telefónicas. En el vecino Alcuéscar en la noche del 7 al 8 de octubre de 1934 también se **cortaron** las líneas telefónicas a Montánchez. Cuatro individuos fueron juzgados por rebelión y desórdenes públicos. No pudo probarse la rebelión, pero los implicados en el corte de líneas fueron condenados por desórdenes públicos a un año, ocho meses y veintidós días de prisión menor<sup>71</sup>.

El episodio mejor conocido, que muestra la profunda desorientación, falta de coordinación y mucho de improvisación que hubo en estos sucesos, tuvo lugar en **Monroy**. Tal como lo consideró la justicia, se trató de un verdadero levantamiento, calificado en el juzgado de Garrovillas de rebelión. En la mañana del 6 de octubre de 1934, un grupo de directivos y socios de la sociedad obrera «La Humildad» adoptaron el acuerdo de distribuir letreros en algunos edificios de aquel pueblo que decían « ¡Viva el Comunismo !», « ¡Viva la Revolución !» y recorrieron las calles con una bandera y carteles análogos y otro en el que decían « ¡ Abajo el Gobierno constituido !», provocando directamente la alteración del orden público. Sin embargo, se disolvieron sin la menor resistencia en el momento en que la fuerza de la **Guardia Civil** se presentó en la localidad, procedente del pueblo vecino de Talaván, de donde fue reclamada por el Alcalde. Once personas fueron encausadas, para las que el Fiscal pidió cuatro meses de arresto por desórdenes públicos; además solicitó la disolución de aquella sociedad obrera. La Audiencia condenó a diez de los inculcados a tres meses de arresto mayor, a un menor a 250 pts. de multa y decretó la disolución de la Sociedad «La Humildad»<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> Como tantos otros dirigentes obreros, el cambio de situación política y de ordenamiento legal a partir de julio de 1936 le resultó fatal y pereció asesinado en los primeros momentos de la Guerra Civil.

<sup>69</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 117 de 28 de marzo.

<sup>70</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 24 de 17 de enero.

<sup>71</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 162 de 2 de mayo.

Junto a estos sucesos, que en pequeña escala representarían un intento de subversión del orden establecido, se produjeron otros, **menos atractivos** desde el punto de vista histórico, cuyas repercusiones penales fueron variables, en función de los muy distintas complicaciones legales que conllevaban los actos delictivos. La proclamación del «estado de guerra» en la provincia el 7 de octubre determinó la prohibición de todo tipo de reuniones. Los infractores debieron hacer frente a las exigencias de responsabilidades por reunión ilegal<sup>73</sup>. En otros casos los sucesos tuvieron tales complicaciones que la cuantía de las penas se elevó de manera excepcional<sup>74</sup>. Menudearon los ataques verbales a la fuerza pública y conatos de agresión física, protagonizados por obreros en huelga e, incluso, por mujeres.

## 6.4. OTROS EPISODIOS DELICTIVOS DE CARACTER SOCIO-POLÍTICO

### 6.4.1. Coacciones.

Los conflictos en el campo, las huelgas de trabajadores, movilizaban a piquetes, muy nutridos en ocasiones, que trataban de conseguir por la fuerza la paralización de la actividad laboral, coaccionando a los que no habían secundado el paro, para que cesasen en el trabajo. Con frecuencia terminaban en **agresiones**, lo que introducía una nueva caracterización penal: lesiones. Estos actos no sólo afectaron al campo, también se extendieron a otros ámbitos productivos. Arrendatarios, yunteros y jornaleros se vieron implicados en los pleitos. La ley de Términos municipales también originó enfrentamientos entre trabajadores de pueblos vecinos.

Las coacciones no sólo afectaban a conflictos laborales concretos, sino que también se ampliaban al marco de las relaciones sociales. En ocasiones adquirieron características de participación masiva, en un intento por **expulsar** de la comunidad rural a aquellos elementos obreros que no aceptaban las imposiciones de las organizaciones proletarias<sup>75</sup>.

La mayoría de estos episodios terminaban con la imposición de leves penas de cárcel. La más frecuente solía ser de dos meses y un día de arresto mayor, más una multa, entre 250 y 500 pts. En algunos casos no se vio delito y la actuación se calificó de simple falta a la Ley de Huelgas de 1909. Pero, tan importante o más que la privación de libertad podían resultar las **multas** para las modestas economías campesinas. En relación con las penas de tipo económico impuestas, hay un

<sup>72</sup> A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 353 de 31 de diciembre.

<sup>73</sup> El 8 de octubre de 1834 entre 70 y 80 personas se reunieron en Casas de Millán contraviniendo el bando que declaraba el estado de guerra. Tres fueron condenados como promotores a tres meses de arresto mayor. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 83 de 25 de febrero.

<sup>74</sup> Un grupo de 17 vecinos de Pozuelo de Zazón fue juzgado por asesinato y reunión ilegal. Aunque instruyó sumario la jurisdicción de guerra se inhibió y pasó a la vía civil. No pudo probarse que los procesados se hubiesen reunido ilegalmente durante los días 3 al 8 de octubre de 1834. Sin embargo, en la noche del 9 de octubre varios de ellos tiroteron, apostados, un coche en el que suponían llegaba la fuerza pública reclamada por el Alcalde, falleciendo el conductor. El Tribunal de Urgencia condenó a los tres implicados en el asesinato a penas que iban de los 25 a los 30 años de reclusión mayor y se absolvió al resto del delito de reunión ilegal. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 253 de 9 de julio.

<sup>75</sup> En Portezuelo se produjo un motín popular en contra un trabajador, empleado del mayor terrateniente del pueblo, que se negó a afiliarse a una organización proletaria y a abandonar el pueblo. Tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil. Cuatro de los implicados fueron condenados por coacciones a dos meses y un día de arresto mayor y a una multa de 250 pts. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1935, Sentencia nº 456 de 26 de noviembre.

aspecto de sumo interés, que aquí no se trata, pero al que nos hemos referido en otro lugar (Sánchez Marroyo, 1982) de gran trascendencia: hacer frente al pago de estas responsabilidades forzaba a muchos modestos campesinos a desprenderse de sus patrimonio.

#### 6. 4. 2. *Desórdenes públicos*

Fueron muy numerosos a lo largo de estos años y obedecían a muy distintas motivaciones. Unos eran consecuencia de los **enfrentamientos** entre grupos políticos rivales, que no sólo se atacaban de palabra, como se vio antes, sino también de obra, lo que originó frecuentes alteraciones del orden público. Los incidentes entre facciones políticas distintas degeneraban en frecuentes riñas, que llegaban hasta el intento de asesinato. En todos estos delitos había, además, uso ilícito de armas que no se consideraban de manera autónoma, sino como un elemento más de la sedición o rebelión, aun cuando las penas sí se desglosaban.

Eran frecuentes los altercados en medio de los **mítines** de fuerzas rivales. Notorios personajes de la política provincial<sup>76</sup> o nacional<sup>77</sup> vieron así violentamente interrumpidos sus actos públicos. Desde los primeros momentos del régimen, las **conmemoraciones** tanto de tipo laico (1º de mayo), como religioso (Procesiones de Semana Santa o Fiestas Patronales) derivaban, a veces, en enfrentamientos<sup>78</sup>, saldados con heridos y, en alguna ocasión, con muertos. La tensión se incrementaba cuando coincidían en el tiempo y en el espacio actos de signo contrario. La existencia de un matiz provocador no debe ser olvidado<sup>79</sup>.

Uno de los episodios de violencia política más conocidos fue el ocurrido en vísperas de la elecciones de 1933. El 5 de octubre de 1935 se produjo el juicio, por **homicidio** y tenencia de explosivos, contra Máximo Calvo Cano, destacado líder del comunismo provincial, alcalde de Cadalso. En la madrugada del 2 de noviembre de 1933 cuando un grupo de mozos del pueblo recorría las calles dando «Vivas a la Religión» y «Abajo el Comunismo» hizo desde su domicilio varios disparos, matando a uno de los manifestantes. Registrada su casa se le encontraron varios

<sup>76</sup> Los diputados radical-socialistas a Cortes Constituyentes Antonio de la Villa y Angel Segovia vieron interrumpido, con insultos y protestas, su mitin en Logrosán el 8 de mayo de 1932. Suspendido el acto, continuaron los desórdenes y agresiones en la calle con gritos de «¡Viva la República Social!» Los encartados, entre ellos el Presidente de la Casa del Pueblo, fueron condenados a dos meses y un día de arresto mayor. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1933, Sentencia nº 232 de 9 de noviembre.

<sup>77</sup> El 25 de febrero de 1934 celebró un mitin en Plasencia la Alianza de Labradores, filial del Partido Radical-Socialista en el que tomó parte, Félix Gordón Ordax. Varios individuos, militantes proletarios, empezaron a interrumpir a los oradores con gritos («Queremos pan, tierra y trabajo y no tanta política») logrando impedir la celebración del acto. Ante los desórdenes se produjeron cargas de la fuerza pública, que fue insultada. Siete implicados fueron condenados a diversas penas de cárcel y multas por el delito de desórdenes públicos e injurias. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 101 de 7 de abril.

<sup>78</sup> En los últimos años de vida republicana, cuando el sectarismo se había apoderado definitivamente de la vida nacional, no hubo lugar a estos enfrentamientos, puesto que los gobiernos, de izquierda o de derecha, terminaron prohibiendo los actos, civiles o religiosos, contrarios a sus planteamientos.

<sup>79</sup> En Zorita la procesión del Jueves Santo se encontró varias veces en las calles con una manifestación obrera surgiendo la disputa. El farmacéutico del pueblo se vio acusado, por haber sacado una pistola en el tumulto que se organizó, de tenencia ilícita de armas. Fue absuelto por falta de pruebas. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1933, Sentencia nº 18 de 17 de enero.

cartuchos de dinamita con mechas y fulminantes. El Tribunal del Jurado lo encontró culpable de homicidio y tenencia de explosivos, condenándolo a quince años, ocho meses y un día de reclusión menor y 15.000 pts. de indemnización a los familiares de la víctima<sup>80</sup>.

Las peleas entre grupos rivales terminaban en **heridos**, lo que hizo pasar estos casos bajo la calificación de lesiones, con uso de armas. Las repercusiones penales eran tantos más graves cuanto más elementos intervenían (atentado). Las elecciones locales a cargos de justicia (fiscal municipal) proporcionaban nuevos motivos de enfrentamientos entre los adversarios que se disputaban la victoria. En ocasiones era el simple rumor de actuaciones clandestinas, colocación de bombas, el que motivaba la agitación popular.

#### 6.4.3. *Atentados y desacatos a las autoridades locales*

Se vieron afectados especialmente por estas actuaciones delictivas los **jueces**. Al margen de la irritación ante el resultado adverso de un pleito que, motivado por comportamientos viscerales, podía dar lugar a actitudes de violencia (consideradas como desacato a la autoridad) se dieron reacciones más trascendentes, que suponían poner en cuestión la difícil integración en el régimen republicano de muchos jueces procedentes de la Monarquía, con un comportamiento **sospechoso** hacia la República y de gran lenidad, cuando no complicidad, con sus enemigos.

La reacción de rechazo contra la autoridad judicial podía manifestarse, pues, de manera visceral, agresiva, bien de forma tumultuaria<sup>81</sup>, bien individual, que llegaba al **rechazo** del sistema penal (acusando al Juez de parcialidad). Pero también el desacuerdo con la actuación de los jueces, considerada parcial y poco acorde con el espíritu republicano, se manifestó con otros métodos, pretendiendo **trascender** la simple algarada. Un ejemplo destacado de ello fue el escrito que, redactado por el Alcalde y Secretario de Jarilla el 19 de mayo de 1936, fue enviado a los pueblos del partido de Hervás, quejándose de la parcialidad del Juez de 1ª Instancia contra las clases trabajadoras y las autoridades democráticas. Según los autores del escrito, llegó a amenazar con encarcelar a los concejales si seguían haciendo nuevas detenciones de elementos «fascistas». Su actuación era calificada de contraria a las masas populares y de servilismo descarado a los reaccionarios. Se invitaba a celebrar una asamblea en Hervás para, de forma colectiva, pedir el traslado de aquel Juez. El Alcalde, que ya había sido juzgado por tenencia de armas y por la Justicia Militar por un delito de ofensas a fuerza armada, fue condenado por desacato a la autoridad a cuatro meses y un día de arresto mayor<sup>82</sup>.

Fueron frecuentes las cartas al Presidente de la Audiencia **insultando** a los jueces municipales y de Primera Instancia. Los calificativos de «ladrones», «pistoleros», «bandidos», «canallas», «criminales», etc. menudearon en estos escritos, caracterizados penalmente de atentado y desacato.

<sup>80</sup> Tras la elecciones de febrero de 1936 fue puesto en libertad. Sobre este personaje, que adquirió una notable, y triste, celebridad durante la Guerra Civil, puede verse una breve biografía en la *Gran Enciclopedia Extremeña*.

<sup>81</sup> El Juez de 1ª Instancia de Jarandilla debió hacer frente a un motín protagonizado por casi un centenar de vecinos que se congregaron ante su casa en actitud amenazadora y violenta, y además de insultarlo pretendieron acometerlo por haber liberado a dos pistoleros derechistas. El Tribunal de Urgencia condenó a uno, reincidente, a tres años de prisión menor y 1.500 pts. de multa y a los otros cuatro a dos años, cuatro meses y un día y multa de 1.000 pts. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1936, Sentencia nº 215 de 12 de junio.

<sup>82</sup> A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1936, Sentencia nº 287 del 15 de julio.

Acusación especial era la de no aplicar las leyes del Ministerio de Trabajo. De las palabras se pasaba a los hechos y algún juez municipal se vio agredido con arma blanca. Las penas eran en estos casos de prisión menor.

La difícil situación económica por la que atravesaban muchos individuos era fuente de graves problemas para las autoridades municipales. De ello se derivaban amenazas y faltas contra el orden público. El hambre y la necesidad de alimentar a la familia movían a algunos padres desesperados a insolentarse con los alcaldes, que, por su parte, se mostraban incapaces de resolver el problema. Las situaciones podían ser patéticas<sup>83</sup> y las amenazas constantes. Menudearon las actitudes violentas, que reclamaban por la fuerza, incluso con amenazas de muerte, trabajo. Estos hechos sólo contribuían a agravar la situación, por la exigencia de responsabilidades penales.

Los alcaldes podían ser agredidos, además, por borrachos a los que trataban de llamar la atención o por querellantes en medio de una pelea, pero también eran víctimas de las pasiones políticas. Alguno sufrió el amotinamiento de los vecinos, que intentaban deponerlo. El desempeño de su labor, en los constantes momentos de crispación, siempre resultó difícil.

#### 6.4.4. Actuaciones contrarias al Movimiento

Aunque no fueron calificadas como tal y resultaron penadas simplemente por la legislación republicana ordinaria, su significado real obedecía a aquel planteamiento. En los primeros días de la Guerra Civil, la confusión reinante en aquellos momentos dio lugar a ciertos equívocos de tipo político, de desigual resultado para los implicados. De esta forma la jurisdicción ordinaria se encargó, en algunos casos, de penar fenómenos de disidencia política que caían ya dentro del fuero de guerra. Se trata de episodios de tipo anecdótico, pero significativos, que marcan la transición de la legalidad constitucional a la nueva situación bélica. El 22 de julio de 1936, cuando hacía ya tres días que estaba declarado el «estado de guerra» en la provincia, dos jornaleros, sin meditar mucho el alcance de sus actos, izaron una bandera roja en la Casa del Pueblo de Ceclavín. Bandera de la que se apoderaron al día siguiente las fuerzas concentradas de la Guardia Civil y carabineros de Alcántara. El acto costó a sus autores, acusados de intenter provocar la alteración del orden público, cuatro meses de arresto mayor<sup>84</sup>.

Situación similar de desorientación, en este caso movida por su intento de defensa del orden constitucional, fue lo ocurrido al Alcalde de Arroyomolinos de la Vera. Intentó detener, el 20 de julio, al Juez Municipal por hacer pública apología del movimiento militar, dando vivas a España y al Ejército. La dureza de la sentencia del Tribunal de Urgencia reflejó bien el cambio que se había producido en el país<sup>85</sup>. De todas formas, tal como estaban las cosas en aquellos días, milagro era salvar la vida, una vez se había perturbado el normal funcionamiento del sistema judicial. Porque no sólo el fuero de guerra consideraría de manera muy diferente aquellos hechos,

<sup>83</sup> Un parado, con 7 hijos hambrientos, al encontrarse con el alcalde pretendió que éste se hiciera cargo de sus hijos ya que no tenía para darles de comer. La primera autoridad municipal contestó mal y riñeron. La desesperación le costó al parado seis meses y un día de prisión menor y 250 pesetas de multa. A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1934, Sentencia nº 25 de 17 de enero.

<sup>84</sup> A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1936, Sentencia nº 330 de 21 de octubre.

<sup>85</sup> Fue condenado, por atentado a la autoridad, a cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y a una multa de 1.000 pts. A. A. T. Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal*, 1937, Sentencia nº 51 del 31 de marzo.

sino que también los grupos irregulares, que de manera paralela se dedicaban a las tareas represivas de la disidencia sociopolítica, encontrarían en estos comportamientos materia más que suficiente para intervenir.

## 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Englobamos aquí uno de los núcleos más característico y representativo de lo que consideramos delincuencia social. Estos actos, en sus diversas manifestaciones, no pretendían alterar, en sentido estricto, el orden establecido, pero **perturbaban** el disfrute de uno de los elementos definidores y, por tanto, esenciales, del sistema social, la **propiedad**. Aspecto de sumo interés, por sus connotaciones sociales eran los endémicos robos en el campo, de frutos y ganados. La justicia distinguía bien la actuación eventual, aunque fuera reincidente, del profesional del robo, para los que caían fuertes penas. Muchos de estos robos se hacían de manera colectiva, interviniendo centenares de personas y daban lugar a procesos masivos. Por su entidad, representaban los casos penales más numerosos y el volumen de inculpados era muy grande, merecen un trabajo propio que dejamos para otra ocasión. Las circunstancias de espacio impiden tratarlos aquí, sólo se hace una simple mención, de carácter testimonial, a fin de abarcar un más amplio y completo panorama de lo que hemos llamado delincuencia socio-política.

El **hambre** aparecía como elemento originario del problema. Por ello es preciso poner en relación estos delitos con el «estado de necesidad». Destacados penalistas han incluido tradicionalmente el estado de necesidad entre las causas de inculpabilidad, aunque otros la han considerado como una causa de justificación. En el ámbito nacional Luis Jiménez de Asúa, sensible a las necesidades de los humildes, apoyó claramente este planteamiento, "sigo fiel a mi criterio de siempre: el estado de necesidad es una causa de justificación, basada en el principio de salvaguardar el «bien de valor mayor», el «interés preponderante»" (Jiménez de Asúa, 1949). La apropiación indebida de unos bienes tenía su más genuina representación en los robos de frutos o ganados, pero también hay que considerar otro tipo de actos contra la propiedad, muy específicos.

### 7.1. ROBO DE FRUTOS Y GANADOS

Dentro de los robos, actividad delictiva que, por el objeto a que atiende, admite muy distintas clasificaciones, resultan de interés en el análisis histórico aquellos que se producían en el campo, aprovechando la falta de vigilancia. Dos tipos de robos, de carácter colectivo, han merecido tradicionalmente especial atención:

- a) **Bellotas.**
- b) **Leña.**

### 7.2. CAZA.

La Ley de caza de 16 de mayo de 1902 y el Reglamento de 3 de julio de 1903 establecieron un minucioso ordenamiento de este conflictivo sector, que aportó un alto número de causas. El carácter delictivo derivaba de los **lugares** donde se cazaba (acotados) y de los **medios** empleados para capturar a las piezas (trampas).

Tenía la caza ciertas concomitancias con el robo de frutos; era una forma de saciar el hambre. De hecho en alguno de los casos estudiados la defensa alegó, con carácter exculpativo, **hurto famélico**, que no fue estimado ya que estaba prevista en el caso "de conflicto entre bienes de desigual valor y que tiene su fundamento, objetivamente, en la teoría según la cual debe preferirse

el sacrificio de la propiedad -bien menor- en aras de la vida del hambriento- bien superior- y subjetivamente en la falta de temnibilidad del que hurta para comer el o los suyos, requiere con arreglo al precepto legal que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, por el peligro social que de no ser así, representaría y que confundiría a los desgraciados con los vagos, circunstancias que no constan probados en este caso (...) ello aparte que tal circunstancia, en cuanto al hurto famélico, para poder estimarse exige, por modo indudable, que el estado de agotamiento del sujeto por el hambre pasada sea tal, que privándole de su libre albedrío y con noción atenuada o nula del bien y del mal, sea el hambre, precisamente, la que impulse, en forma irresistible, a obrar en esta forma, justificándose con ello el hecho, de ordinario reprehensible y nada de esto ocurre en el actual caso, (...) por el simple hecho de que casi todos ellos dispusieran de arma de fuego con su correspondiente licencia, lo que presupone un estado económico incompatible con aquella situación"<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> A. A. T. de Cáceres, *Libro de Sentencias de lo Criminal, 1935*, Sentencia nº 210 de 19 de mayo.

## BIBLIOGRAFÍA

BUSTOS RAMÍREZ, J. y HORNAZABAL, H.

(1980): "Pena y Estado" en *Papers. Revista de Sociología*, 13, .

FIESTAS LOZA, A

(1977): *Los delitos políticos*, Salamanca.

HIBBERT, Ch.

(1975): *Las raíces del mal. Una historia social del crimen y su represión*, Luis de Caralt, Barcelona.

JACKSON, G.

(1976): *La Segunda República y la Guerra Civil*, Crítica, Barcelona.

JIMENEZ ASUA, L.

(1946): "Alcoholismo y criminalidad" en *El Criminalista*, I, Buenos Aires, Edit. La Ley. 285-331.

(1949): "Hurto famélico y miseria" en *El Criminalista*, III, Buenos Aires, Tipográfica Ed. Argentina, pp. 78-79.

MARCOS AREVALO, J.,

(1984): *El hacinamiento, la marginación y la pena de muerte. (La cárcel de Badajoz en el siglo XIX)*, Diputación Provincial, Badajoz.,

MARTIN CORTES, M.

(1977): *Delincuencia en Cáceres durante la Segunda República (Crisis Sociopolítica y delincuencia)*, Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Extremadura.

MERINERO MARTIN, M<sup>a</sup> J.

(1990): *La Audiencia de Extremadura y el sistema penitenciario (1820-1868)*, Asamblea de Extremadura, Mérida.

(1989): *Purificaciones de empleados públicos*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres. .

(1981): "La mentalidad del castigo. Un ensayo metodológico" en *Estudios sobre Historia de España*. Obra Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Vol. III, Madrid, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, pp. 407-416.

NUÑEZ FLORENCIO, R.

(1983): *El terrorismo anarquista (1888-1909)*, Siglo XXI, Madrid.

RODRIGUEZ SANCHEZ, A.

(1981): *Morir en Extremadura*, Institución Cultural El Brocense, Cáceres

RODRIGUEZ DE LAS HERAS, A.,

(1980): "La alteración de la información en la prensa. Un artificio metodológico" en *Norba*, I, pp. 395-400.

SANCHEZ MARROYO, F.

(1990): " La organizaciones obreras en Extremadura durante la Segunda República" en *Investigaciones Históricas*, 10, pp. 123-163.

(1982) *El campo y el campesinado cacereño durante la Restauración (1870-1920). Formas de propiedad y explotación*, Universidad de Extremadura, (Tesis Doctoral inédita).